



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP

Estudio Nacional:

► Impulsando la Productividad en Colombia



ESTUDIO NACIONAL:

Impulsando la Productividad

EN COLOMBIA



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2023

Primera edición 2023

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo están protegidas por derechos de autor en virtud del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, se pueden reproducir extractos breves de ellos sin autorización, siempre y cuando se indique la fuente. Para derechos de reproducción o traducción, la solicitud debe dirigirse a ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico: rights@ilo.org. La Oficina Internacional del Trabajo acoge favorablemente dichas solicitudes.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados en una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de conformidad con las licencias que se les otorgan para este fin. Visite www.ifrro.org para hallar la organización de derechos de reproducción de su país.

Estudio Nacional: Impulsando la Productividad en Colombia. Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP), 2023. 60 pp.

ISBN: 9789220397848 (versión impresa)

ISBN: 9789220397855 (versión web PDF)

Datos de catalogación de la OIT

Productividad, creación de empleo, crecimiento económico, organizaciones empresariales y de empleadores, trabajo decente, desarrollo sostenible.

Las designaciones empleadas en las publicaciones de la OIT, que se encuentran de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas, y el material presentado en ellas no implican la expresión de ninguna opinión de la Oficina Internacional del Trabajo sobre el estado legal de ningún país, área o territorio o sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en artículos, estudios y otras contribuciones firmadas corresponde exclusivamente a sus autores, y su publicación no constituye un respaldo de la Oficina Internacional del Trabajo a las opiniones expresadas en ellos. Las referencias a nombres de empresas y productos y procesos comerciales no implican respaldo a estos por parte de la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de no mencionar una empresa, producto o proceso comercial en particular no indica desaprobación.

Puede encontrar información sobre publicaciones de la OIT y productos digitales en: www.ilo.org/publns.

Diseño, maquetación y concepto editorial: Ana Periche Acosta

ADVERTENCIA

El uso del lenguaje que no discrimine, ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español *o/a* para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.

Índice

Resumen ejecutivo	1
Capítulo 1: La productividad en Colombia	4
Figura 1.1 Crecimiento de la productividad total de los factores	4
Figura 1.2 Contribución de los factores al crecimiento	5
Figura 1.3 Productividad laboral por trabajador	6
Figura 1.4 Productividad laboral por hora trabajada	7
Figura 1.5 PIB per cápita	8
Capítulo 2: Entorno empresarial propicio para la productividad	9
2.1. Estabilidad macroeconómica	9
Figura 2.1.1 Evolución del PIB	9
Figura 2.1.2 Inflación anual IPC	10
Figura 2.1.3 Inflación subyacente	10
Figura 2.1.4 Deuda pública bruta	11
Figura 2.1.5 Servicio de la deuda externa garantizada	11
2.2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa	11
Figura 2.2.1 Años promedio de educación	12
Figura 2.2.2 Pruebas PISA	13
Figura 2.2.3 Comparativo entre participación laboral total (PL) y educación avanzada (PLEA)	13
Figura 2.2.4 Habilidades de la fuerza laboral actual y futura	14
2.3. Mercados laborales inclusivos y flexibles	15
Figura 2.3.1 Tasa de ocupación	15
Figura 2.3.2 Porcentaje de mujeres en puestos de gerencia	16
Figura 2.3.3 Desempleo total y proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan	17
Figura 2.3.4 Subempleo	17

2.4. Transición para salir de la informalidad	18
Figura 2.4.1 Proporción del empleo informal	18
Figura 2.4.2 Proporción de trabajo informal a empleo total por sexo	19
Figura 2.4.3 Proporción de trabajo informal a empleo total por nivel de educación	19
Figura 2.4.4 Proporción de trabajo informal a empleo total por zona rural/urbana	19
Figura 2.4.5 Proporción de trabajo informal a empleo total por edad	19
2.5. Emprendimiento e innovación	20
Figura 2.5.1 Indicadores de emprendimiento	20
Figura 2.5.2 Gasto en investigación y desarrollo (I+D)	22
Figura 2.5.3 Índice de preparación para la tecnología de punta	23
2.6. Acceso al crédito y a servicios financieros	23
Figura 2.6.1 Cuenta actual en institución financiera	24
Figura 2.6.2 Solicitantes de préstamos	25
Figura 2.6.3 Préstamos activos por pyme	25
Figura 2.6.4 Tasa de interés activa	26
Figura 2.6.5 Diferencial entre tasas de interés activa y pasiva	27
2.7. Infraestructura física y digital, y conectividad con mercados internacionales	27
Figura 2.7.1 Percepción de la calidad de la infraestructura y suministro eléctrico	28
Figura 2.7.2 Conectividad y calidad	29
Figura 2.7.3 Penetración de las exportaciones	31
Figura 2.7.4 Concentración de las exportaciones	31
2.8. Derecho de propiedad y Estado de derecho	31
Figura 2.8.1 Puntaje del componente de derecho de propiedad	32
Figura 2.8.2 Percepción del Estado de derecho y de la calidad regulatoria	33
2.9. Gobernanza y política anticorrupción	33
Figura 2.9.1 Índice de percepción de la corrupción	34
Figura 2.9.2 Percepción del control de la corrupción	35
Capítulo 3: Impulsando la productividad en Colombia	36
Referencias bibliográficas	41

Prefacio



El bajo crecimiento de la productividad en los países de América Latina y el Caribe explica, en parte, el escaso desarrollo productivo y económico de la región, lo que a su vez afecta en forma negativa la creación de trabajo decente y la calidad de vida de millones de personas. Por estos motivos, los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideran prioritario mejorar la productividad como forma de promover un mayor desarrollo social y económico de la región. En su 341ª reunión en marzo de 2021, el Consejo de Administración de la OIT analizó el documento [El trabajo decente y la productividad](#), que destaca la necesidad de abordar, desde una perspectiva sistémica, los diversos factores que inciden en el aumento de la productividad y su efecto catalizador sobre la creación de trabajo decente, el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida.

En 2022, la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe publicó el Informe Regional: [Transición digital, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: desafíos y oportunidades](#), que se aproxima al tema desde múltiples aristas y muestra cómo la productividad de la región ha venido cayendo con respecto a la del resto del mundo, incluso en comparación con otras zonas de países emergentes. De acuerdo con el Informe, los datos muestran que existe una enorme heterogeneidad en el nivel de la productividad entre países, así como entre empresas de diferente tamaño y pertenecientes a distintos sectores de actividad. En sus conclusiones, el Informe ofrece una serie de recomendaciones generales que toman en cuenta estos elementos y que sirvieron de estímulo para emprender la presente investigación.

Además, la publicación del Informe Regional en 2022 motivó a los mandantes de la OIT a solicitar el análisis de la situación específica de los países del continente. Por esa razón, en 2023 la Oficina Regional de la OIT inició la elaboración de nueve estudios nacionales con el fin de conocer los factores que más impactan en la productividad, para ofrecer una base empírica sobre la cual puedan presentarse recomendaciones para mejorar la situación al respecto. Si bien la baja productividad es un problema regional, las soluciones deben generarse a nivel nacional mediante la aplicación de políticas públicas consistentes.

Los nueve estudios nacionales realizados hasta el presente analizan factores claves que impactan en la productividad de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay, evaluando la situación a través de nueve dimensiones específicas para generar un entorno propicio que ayude a mejorarla¹. Ellas son la estabilidad macroeconómica; el desarrollo de habilidades y calidad educativa; la existencia de mercados laborales inclusivos y flexibles; la transición de la informalidad a la formalidad; la capacidad de promover el emprendimiento y la innovación; el acceso al crédito y a servicios financieros; la infraestructura física y digital; la vinculación con mercados internacionales; el respeto al derecho de propiedad y la vigencia del Estado de derecho; y buenas prácticas de gobernanza y políticas anticorrupción.

Mediante la revisión de indicadores esenciales de la productividad y las dimensiones antes mencionadas, se presenta una trayectoria de la productividad de cada país analizado, tanto en el tiempo como en relación con otros países. Como resultado del análisis, se identifican áreas de oportunidad que deberían

¹ Estas dimensiones fueron inicialmente identificadas en el documento [Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales](#) publicado por la Oficina de Actividades con Empleadores de la OIT (ACT/EMP) en noviembre de 2020.

ser revisadas con mayor detenimiento por parte de los gobiernos y los actores sociales, para generar recomendaciones de acciones prácticas, políticas públicas y mejoras regulatorias que podrían potenciar el incremento de la productividad. Asimismo, la evidencia empírica sobre los principales obstáculos para aumentar la productividad que se muestra en el presente Estudio debería servir a las organizaciones empresariales como insumo para presentar estrategias en diferentes instancias de diálogo social con el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y otras partes interesadas.

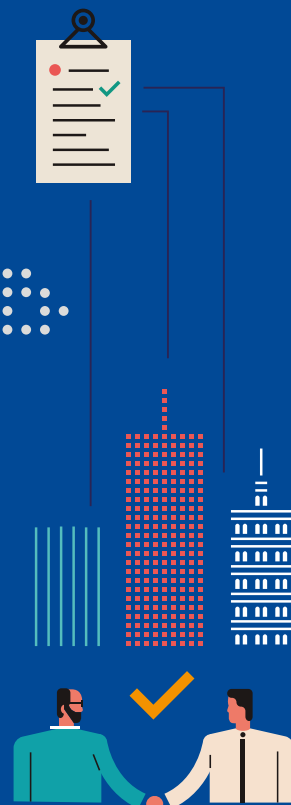
Por último, Impulsando la productividad en Colombia, junto con los otros estudios nacionales realizados por la OIT, nutrirá con datos e información al próximo Informe Regional 2024 Impulsando la productividad en América Latina, cuyo objetivo es profundizar el análisis de las políticas públicas capaces de aumentar la productividad de los países de la región para acelerar el crecimiento económico, volver más sostenibles a las empresas, mejorar los ingresos de los trabajadores/as y, por ende, su calidad de vida, a través del acceso a mayores oportunidades de empleo digno y productivo.

Agradecemos a quienes trabajaron con ACT/EMP para elaborar este Estudio Nacional, incluidos los representantes de las organizaciones empresariales que nos dieron su apoyo y tiempo para revisar el documento final. También agradecemos al equipo de consultores principales integrado por Jorge Ramírez (México), Pedro Espailat (República Dominicana) y Javier Irarrazaval (Chile) por su arduo trabajo de investigación, así como al equipo de investigadores de apoyo Alsacia San Martín, Tomás Larraín Lazcano, y Katherine Javier. Además, agradecemos a María Eugenia Trujillo Ruiz (Perú), quien realizó la revisión de estilo de los textos, y a Ana Periche Acosta por su apoyo en la edición y diseño gráfico de esta publicación. También agradecemos a Tulio Cravo, Especialista Regional de la OIT en Políticas Públicas y Productividad por su apoyo en el proceso de redacción.

El producto final es el resultado de la colaboración de todos los miembros del equipo regional de ACT/EMP en América Latina y el Caribe. En particular, queremos hacer un agradecimiento muy especial al equipo de producción y supervisión general del trabajo realizado, integrado por los Especialistas de ACT/EMP Roberto Villamil, Andrés Yurén y José Luis Viveros.

Claudia Coenjaerts
Directora Regional a.i.
Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe

Deborah France-Massin
Directora
Oficina de Actividades para los
Empleadores de la OIT



“La evidencia empírica muestra que la productividad laboral es el factor económico más importante para fijar los salarios a un nivel que permita a las empresas retener trabajadores y crear empleos. Cuanto mayor sea la productividad, mayor será el nivel de los salarios y mayor la capacidad de las empresas para crear empleos. El crecimiento de la productividad también es una condición necesaria que permite a las empresas mejorar las condiciones generales de trabajo.”

Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales
Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, 2020



Resumen ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo analizar el desempeño de la productividad en Colombia así como sus principales determinantes. Gracias al impulso de la Oficina Regional de la OIT, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Uruguay se han elaborado estudios nacionales en torno a nueve dimensiones claves para crear un ambiente empresarial propicio para la productividad. Estas dimensiones fueron consensuadas tomando como punto de partida el documento *Impulsando la productividad: una guía para organizaciones empresariales* publicado por la Oficina de Actividades con Empleadores de la OIT (ACT/EMP) en noviembre de 2020. Como resultado de este análisis, se emite una serie de guías y acciones de políticas públicas orientadas a potenciar la productividad en Colombia.

Previamente al análisis de las nueve dimensiones mencionadas, a partir de los datos de The Conference Board y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia se estudia la evolución de la productividad total de los factores (PTF) y la productividad laboral. Si bien en el caso de este país el crecimiento promedio de la productividad varía dependiendo de los estimados utilizados, las conclusiones son similares: la PTF no ha avanzado de forma satisfactoria a pesar de exhibir un mejor desempeño promedio que América Latina y el Caribe, región cuya productividad ha sido clasificada como de bajo crecimiento (Fernández-Arias, 2014; BID, 2010). A partir del año 2019 el crecimiento de la productividad en Colombia fue positivo y se mantuvo durante la pandemia; sin embargo, a 2022 se observa una desaceleración que sugiere que aquel crecimiento fue, en parte, el resultado de los ajustes laborales y estructurales adoptados a raíz de la crisis sanitaria.

El capital ha empezado a emerger como el factor de mayor contribución al crecimiento económico, aunque durante la pandemia el trabajo fue el principal tanto en la caída como en la recuperación de la economía. La productividad laboral por trabajador y por hora reflejan rezagos históricos frente a la región y aun más frente a bloques como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) y países como Estados Unidos. El PIB per cápita ha aumentado 1.9 veces de 1990 a 2022, mientras la productividad laboral se ha incrementado en un 1.5. La desigualdad en los ingresos se presenta superior a la de la región, aunque destacan los avances logrados en cuanto a brechas de género.

En términos de las nueve dimensiones que conducen a un entorno empresarial promotor de la productividad, se analizaron los siguientes indicadores claves:

- 1. Estabilidad macroeconómica.** La productividad y el crecimiento económico están intrínsecamente relacionados. Desde que superó su crisis financiera en 1999, Colombia ha experimentado un crecimiento del PIB mayoritariamente positivo, con excepción de 2020, durante la pandemia de la Covid-19, aunque desde 2012 había presentado una desaceleración que se mantuvo hasta la crisis sanitaria. En términos de estabilidad de precios, el país se había colocado dentro de sus bandas de inflación objetivo hasta el repunte ocasionado por la pandemia, y se estima una mejora en la estabilización de los precios por encima de las bandas hasta 2024. En cuanto a la sostenibilidad de la deuda pública, esta se encuentra por debajo del promedio de la región, aunque el servicio de la deuda externa va en aumento. Los principales peligros son regresar a un crecimiento desacelerado y a tasas moderadas, así como la volatilidad de las tasas de cambio.
- 2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa.** A 2021, Colombia cuenta con un promedio de años de educación de 8.9 —ligeramente por debajo de la región—, lo que significa que se alcanza un nivel de

educación preuniversitario. Los datos disponibles en calidad educativa presentan mejoras estables en los resultados de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) 2015 y 2018, aunque se mantiene un alto promedio con niveles bajos de competencias (54 %) o mínimos (27 %). Existen brechas con respecto a las habilidades técnicas y una baja percepción por parte del sector empresarial de una fuerza laboral suficientemente calificada. Se encuentran indicios de que la participación laboral se beneficiaría de un mayor número de personas con educación terciaria.

3. *Mercados laborales inclusivos y flexibles.* Existen marcadas brechas de género en la tasa de ocupación, las que se han mantenido históricamente; y, asimismo, mejoras en la brecha salarial cuando se consideran mujeres que trabajan a tiempo completo. A pesar de ello, la brecha se mantiene de forma significativa en el caso de las mujeres de bajo nivel educativo, que residen en zonas rurales, de etnicidades afrodescendientes y que viven en hogares con menores de 18 años, así como en escalas salariales altas. El sector empresarial demuestra su compromiso con acciones y políticas de equidad, diversidad e inclusión. El desempleo presenta niveles elevados (11.2 % en 2022), aun más en el caso de las mujeres (17.5 % en 2021) y los jóvenes (21.1 % en 2021). A su vez, en términos de horas el subempleo ha alcanzado un 7.5 % en 2021 y, con ingresos adecuados, un 10.9 %, con una tendencia al alza a raíz de la pandemia.
4. *Transición para salir de la informalidad.* En Colombia, la informalidad se ubica por encima de la informalidad de la región, lo que ha sido confirmado con la actualización metodológica del DANE para su medición: 58 % para 2022. La brecha de la informalidad a nivel de género beneficia a las mujeres (-2 a 3 puntos porcentuales), y a nivel educativo, territorial y etario oscila entre 10 y 20 puntos porcentuales. La informalidad es más prevalente en las microempresas (85.3 %) que en otros segmentos, lo que reclama políticas públicas que no aumenten su costo.
5. *Emprendimiento e innovación.* La intención de emprender y la percepción de oportunidades han ido decreciendo desde antes de la pandemia y empeoraron durante esta: se estima que un 80 % emprende por necesidad (por subsistir y ante la escasez de empleos adecuados). En términos de innovación, los datos de investigación y desarrollo (I+D) disponibles indican bajos niveles con relación al PIB (0.28 % a 2020). Por su parte, la inversión promedio del bloque de la OCDE es de 2.7 %. No obstante, el sector empresarial muestra un compromiso con la innovación, y contribuye a ella incluso por encima del Gobierno y las instituciones educativas. Los beneficios se empiezan a ver en un crecimiento —tímido en valores absolutos— de la complejidad de los productos exportados. En términos de preparación para la tecnología de punta, el índice consultado evidencia mejoras desde 2008 hasta el último dato obtenido en 2019, con una posición por encima del promedio regional pero alejada de países referentes. Sin embargo, el subcomponente que consiste en las habilidades para adaptar estas tecnologías presenta una tendencia al empeoramiento.
6. *Acceso al crédito y a servicios financieros.* Si bien Colombia posee un alto nivel de acceso de las personas y empresas a las instituciones financieras, este alcanza al 27.3 % de las empresas y al 15.8 % de las microempresas. Entre las principales barreras se mencionan exceso de trámites, procesos largos y altos costos, y se resalta el uso de recursos propios para financiar necesidades e innovaciones. La tasa activa y el diferencial con la tasa pasiva se han mantenido estables y reduciéndose. Las acciones de lucha contra la inflación pueden significar un riesgo para esta situación.
7. *Infraestructura física y digital, y conectividad con mercados internacionales.* A nivel de infraestructura física existe espacio de mejora, en especial en cuanto a calidad y tiempos por carretera con un enfoque en mantenimiento y reemplazo de estas infraestructuras y en ampliar la cobertura del transporte urbano. Asimismo, se debe procurar que la calidad de la infraestructura de transporte aéreo se mantenga o mejore.

A nivel digital, la medición de la brecha por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones registra una notable diferencia entre la capital y otras zonas del país. En mercados internacionales, Colombia ha ido aumentando la penetración y diversificación de sus exportaciones, pero estas han sido mayormente impulsadas por las tradicionales (agricultura y minerales). Existe el potencial de aumentar el nivel de complejidad de los productos exportados para estimular el crecimiento económico y el de la productividad.

8. *Derecho de propiedad y Estado de derecho, y Gobernanza y política anticorrupción.* El cambio histórico a nivel de la dirección ideológica del país ha repercutido en la percepción de estos indicadores. En la actualidad no se evidencian acciones que estén erosionando estos derechos, pero se requiere que los mensajes sobre políticas públicas sean más claros.

La categorización y el análisis sistemático de estas dimensiones permiten identificar áreas de oportunidad para futuras acciones de diálogo y políticas públicas. Si bien estas y sus recomendaciones derivadas no son exhaustivas, apuntan a una dirección informada. Al respecto, en términos generales, se requiere:

- **Fomentar el desarrollo y la exportación de productos más complejos.** Se debe aprovechar la infraestructura actual y las mejoras en la penetración comercial para apoyar el desarrollo y la exportación de productos considerados de mayor complejidad.
- **Cerrar las brechas de habilidades entre los graduados y las necesidades de las empresas,** con enfoque en el aumento de la inclusión laboral de los jóvenes y el desarrollo de las habilidades técnicas que demandan las empresas.
- **Combatir la informalidad, pero entendiendo su complejidad.** La informalidad predomina en las microempresas, que se ven afectadas por un bajo acceso al crédito. Se debe abogar por revertir esta situación y por políticas holísticas y consensuadas, y por apoyar a las mipymes en su profesionalización y digitalización.
- **Que el sector empresarial siga comprometido con la innovación y las políticas de equidad, diversidad e inclusión.** El sector empresarial colombiano ha demostrado su compromiso en invertir en innovación y perseguir políticas de equidad, diversidad e inclusión. Se debe incentivar la difusión de estas iniciativas.

Capítulo 1

La productividad en Colombia

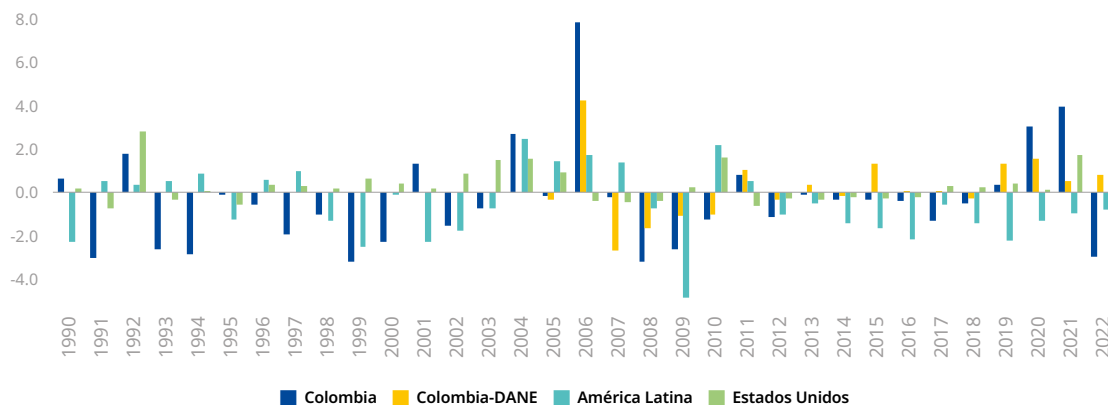
En este capítulo se analiza la evolución de la productividad en Colombia a través del estudio de algunos de los principales indicadores utilizados para medir su desempeño, con la ayuda de los datos calculados por The Conference Board (TCB) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia.

Uno de los indicadores que se suele utilizar para estimar la productividad de una economía es la productividad total de los factores (PTF), que calcula la eficiencia con la que se combinan los insumos de producción (mano de obra, capital y bienes intermedios) cuando se realiza un bien o se brinda un servicio. El crecimiento de la PTF está asociado con diversas variables, entre ellas las mejoras tecnológicas y la innovación, así como el capital humano (educación y salud), la intensidad y eficiencia con que se utilizan el capital y la mano de obra, la calidad de la gestión empresarial (Bloom et al., 2016; Bloom y Reenen, 2007), los cambios en las instituciones o regulaciones, y la disponibilidad de infraestructura (Moss et al., 2020; Kim y Loayza, 2019; Isaksson, 2007). A pesar de algunos inconvenientes metodológicos y contables, la PTF constituye una medida ampliamente usada en Economía debido a su simpleza y comparabilidad con otros países y a través del tiempo.

Figura 1.1

Crecimiento de la productividad total de los factores²

Porcentaje



Fuente: The Conference Board

² The Conference Board utiliza un modelo de contabilidad del crecimiento para PTF (Solow Model). Para más información, puede consultar <https://www.conference-board.org/data/economydatabase/total-economy-database-methodology>. En cuanto a los datos de The Conference Board, el promedio de Latinoamérica y el Caribe está basado en dieciséis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

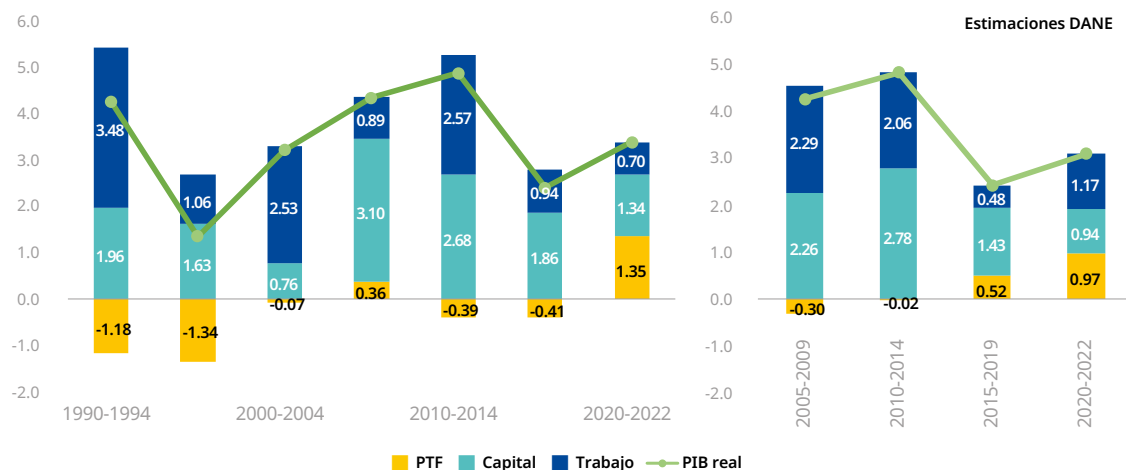
En base a las estimaciones de TCB, ha predominado un crecimiento de la PTF negativo en las últimas dos décadas. El DANE de Colombia publica cálculos de la PTF con observaciones a partir de 2005. Si se comparan las tendencias desde 2005 a 2022 de ambas fuentes de datos, se observa un comportamiento similar hasta 2020, aunque los datos de TCB tienden a ser más marcados en los picos y declives. El promedio de crecimiento de la PTF entre 2005 y 2020 fue de 0.16 para el DANE y 0.05 para TCB. Cabe destacar que el crecimiento promedio de este último se torna negativo si el promedio se realiza de 2005 a 2019 y el del DANE más cercano a cero, lo que demuestra que las mediciones de la PTF pueden cambiar según las estimaciones y datos usados. De ambas fuentes, se puede concluir que la productividad en Colombia medida por la PTF no ha avanzado de forma satisfactoria, conclusión predominante en la región (Fernández-Arias, 2014; BID, 2010). En todo caso, según los datos de TCB, Colombia ha tenido un mejor desempeño que el promedio de América Latina.

A su vez, las economías maduras —como la de Estados Unidos— han mostrado un crecimiento desacelerado en la última década con ciertos periodos de alto crecimiento, mientras que las economías en desarrollo presentan más volatilidad (Moss et al., 2020; Cette et al., 2016), aunque con la llegada de la Covid-19 los efectos en la productividad aún son inciertos (OCDE, 2022). En Colombia se presenta un crecimiento positivo de la PTF en 2019 (antes de la pandemia) que se mantuvo a lo largo de ella. En base a sus estimaciones, a 2022 TCB observa una caída en tanto que el DANE, una desaceleración.

Figura 1.2

Contribución de los factores al crecimiento

Puntos porcentuales



Fuente: The Conference Board

Es útil entender cómo los factores de producción han contribuido a las variaciones en el crecimiento económico: si bien hasta principios de 2000 los datos de TCB indican que el trabajo era el factor de mayor peso, para 2006 y 2007 las estimaciones entre las fuentes difieren considerablemente en su magnitud (aunque no en su dirección). Si se excluyen estos dos años, el capital se presenta ligeramente por encima del trabajo para el periodo 2005-2009. En el lustro 2010-2014 ambas fuentes encuentran una contribución más cercana de capital y trabajo (aunque favoreciendo al capital), y en 2015-2019 el capital predomina como factor. Aunque no se visualice en el agregado de los datos de TCB, el trabajo fue el factor de mayor importancia durante el periodo de pandemia: si para 2020 mostró una caída de entre 9.38 y 11.5 puntos porcentuales, para 2021 y 2022 promedió una contribución positiva cercana a 6.6 puntos porcentuales; es decir, de manera similar a lo ocurrido en otros países de la región, al principio de

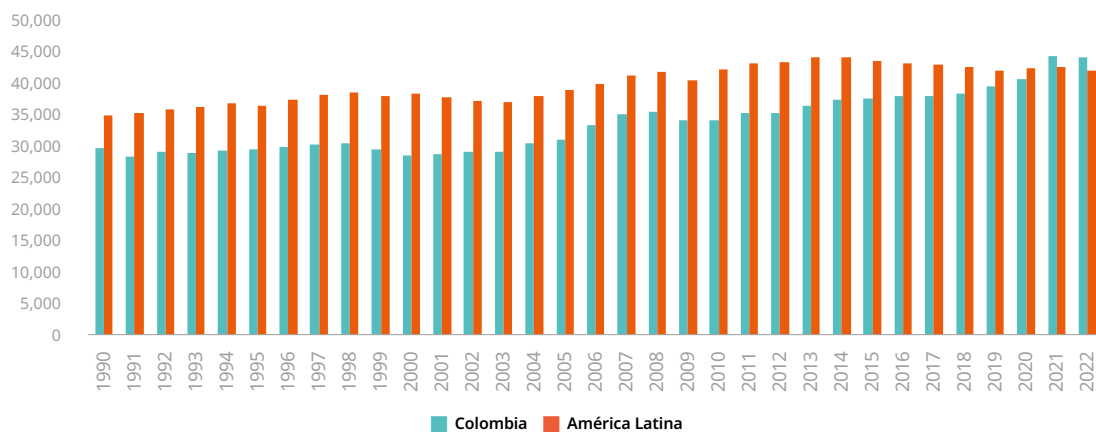
la pandemia hubo pérdida de empleos seguida de una recuperación. En economías como la de Estados Unidos, Stewart (2022) explica que la pérdida de los trabajos menos calificados hizo que aumentara temporalmente la productividad laboral, no obstante tal pérdida llevó, de todas formas, a la caída del rendimiento económico. En el caso de Colombia, aunque los datos apuntan a una dirección similar, aún se necesitan estudios más precisos para entender el efecto de la pandemia en la productividad de ese país y de la región.

Sobre la base de los datos de ambas fuentes, desde principios de 2000 el capital se posiciona, en promedio, como el factor de mayor contribución al crecimiento económico. Aunque con la pandemia el trabajo se coloca nuevamente en el centro dadas las marcadas fluctuaciones en el mercado laboral, a 2023 TCB estima que el capital vuelve a ser el factor principal. Si bien la volatilidad de la PTF dificulta llegar a conclusiones claras, los datos de TCB agregados por lustros muestran fluctuaciones pronunciadas que permiten afirmar que el crecimiento y la contribución de la PTF ha sido débil, con excepción de las distorsiones y ajustes ocasionados durante y después de la pandemia. Se debe tener en cuenta que, aunque la acumulación de capital y trabajo contribuyen al crecimiento económico, a largo plazo la sostenibilidad de tal crecimiento y la elevación de los estándares de vida están asociados a la productividad (Krugman, 1997).

Figura 1.3

Productividad laboral por trabajador

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales 2022



Fuente: The Conference Board

Otro indicador que se utiliza para medir la productividad es la productividad laboral por trabajador, que se calcula dividiendo el PIB de una economía entre la cantidad de personas empleadas; esto en contraste con indicadores como el PIB per cápita, cuyo objetivo es dimensionar el estándar de vida de un país. En Colombia, la productividad laboral por trabajador ha mostrado una tendencia al alza: mientras en 1990 se reportaban \$ 29 616 por trabajador (\$ 9 955 per cápita), en 2022 se alcanzaron los \$ 43 951 (\$ 18 864 per cápita) ajustados a paridad de poder adquisitivo (en dólares internacionales)³. Si bien hasta 2020 el país presentaba una productividad por trabajador inferior a la de Latinoamérica y el Caribe, a partir de 2021 se constata un cambio atribuible en parte a la pronta recuperación de la crisis en comparación con otros países de la región (FMI, Artículo IV 2023) y a una mayor contribución de la productividad laboral

³ La *paridad de poder adquisitivo* es un indicador económico para comparar el nivel de vida entre distintos países: las monedas de los países son homologadas en una moneda de referencia para reflejar el mismo poder de adquirir bienes y servicios en cada país.

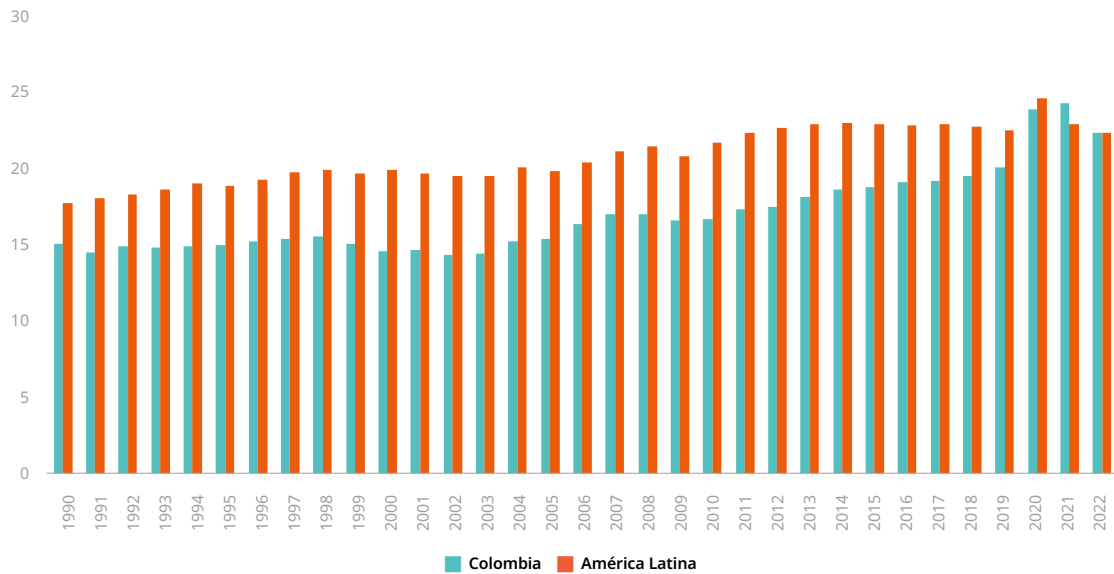
(DANE y TCB). En el análisis de este aspecto, un cambio fundamental en la forma de trabajar en Colombia y el mundo es el mayor uso de las tecnologías digitales (ANDI, 2023). En todo caso, es necesario un mayor entendimiento del efecto a mediano y largo plazos de la crisis sanitaria en la productividad. Por otro lado, cuando se compara Colombia con un país como Estados Unidos, se puede observar la gran diferencia existente así como las oportunidades de mejora: para 2022, una persona trabajadora en Estados Unidos producía, en promedio, \$ 158 352.

La productividad laboral también puede medirse por hora trabajada, indicador más recomendado para los países en desarrollo. De acuerdo con el *Manual de medición de la productividad* de la OCDE, un conteo simple de las personas empleadas puede distorsionar la realidad (OCDE, 2001) porque puede ocultar el verdadero impacto del subempleo (OIT, 2020). Al igual que con la serie de productividad por trabajador, se observa un crecimiento de \$ 15 por hora en 1990 a \$ 23 en 2022. Resalta, nuevamente, que a raíz de la pandemia la productividad laboral aumentó y se posicionó en la serie, por primera vez, encima del promedio de América Latina; aunque en comparación con Estados Unidos, con \$ 87 por hora trabajada, la disparidad sigue siendo notoria. De acuerdo con la OCDE, Colombia es uno de los países en que más horas se trabaja dentro del grupo (OCDE, 2021). Según estimaciones del DANE a 2022, la productividad laboral por hora es inferior a la productividad por trabajador.

Figura 1.4

Productividad laboral por hora trabajada

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales 2022



Fuente: The Conference Board

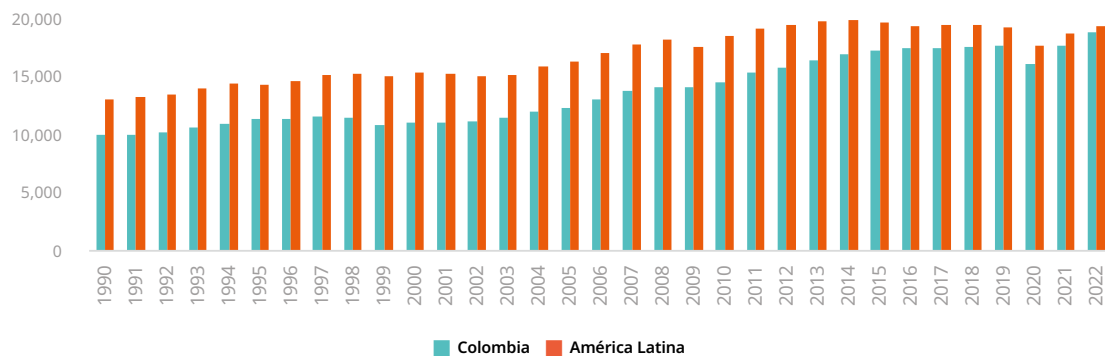
Cuando se habla de productividad en Colombia, no deben soslayarse temas como estándar de vida y desigualdad económica, dado que se espera que el crecimiento de la primera redunde en la mejoría de los segundos. A nivel de productividad laboral, Colombia ha crecido 1.48 veces desde 1990 y, al mismo tiempo, en promedio ha mejorado el estándar de vida de las personas, con un declive en 2020 que prontamente fue recuperado. A 2022, el PIB per cápita ajustado por paridad adquisitiva alcanzó los \$ 18 864, 1.9 veces mayor que en 1990.

En cuanto a la desigualdad, el índice de Palma muestra que, a 2021, el 10 % de los más ricos en Colombia recibe 3.6 veces más ingresos que el 40 % de los más pobres (PNUD, 2021). Por su parte, el índice de Gini⁴ se sitúa en 2021 en 51.5, por encima de varios países de Latinoamérica y el Caribe (Banco Mundial). Ambos índices aumentaron durante la pandemia (2020) y, si bien en 2021 se colocaron a niveles inferiores que en 2019, aún muestran significativos niveles de desigualdad. Hay que recordar que estos índices se enfocan en la distribución de ingresos y no capturan a corto plazo avances en otros aspectos de la igualdad como el acceso a la educación, trabajo, equidad de género, salud y cambios estructurales en la población.

Figura 1.5

PIB per cápita

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales 2022



Fuente: The Conference Board

⁴ Cerca de 100 implica desigualdad perfecta y cerca de 0, igualdad perfecta.

Capítulo 2

Entorno empresarial propicio para la productividad

2.1. Estabilidad macroeconómica

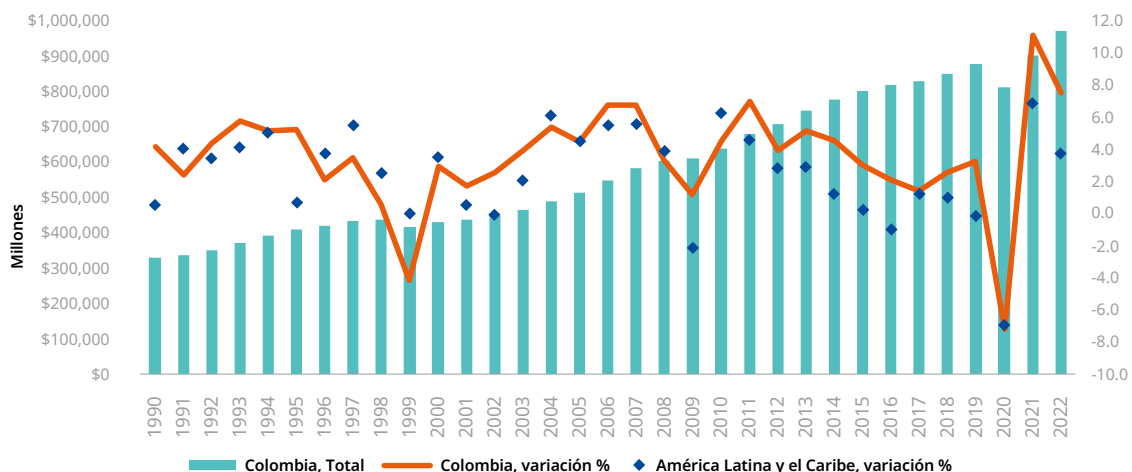
La estabilidad macroeconómica es uno de los pilares de un entorno empresarial que promueve la productividad, e incluye la estabilidad de precios, políticas fiscales sólidas, índices de endeudamiento sostenibles, balances robustos en los sectores público y privado, y un funcionamiento saludable de la economía real (Ocampo, 2005). En este acápite se exploran algunas de las variables que ayudan a entender la estabilidad macroeconómica de Colombia con miras a impulsar su productividad.

La productividad y el crecimiento económico están intrínsecamente relacionados: la primera constituye un motor clave del segundo (OIT, 2020). La desaceleración y las caídas del crecimiento económico, en especial si resultan en crisis económicas, conllevan una debilitación del *stock* de capital y los mercados laborales (OCDE, 2016), lo que, a su vez, deriva en una desaceleración del crecimiento de la productividad total de los factores, que ha venido acompañado de un crecimiento débil a nivel global (OCDE, 2016). En el caso de Colombia, durante las últimas décadas el crecimiento económico ha sido sostenido (con excepción de dos periodos marcados de crisis), lo que demuestra una mayor resiliencia ante las crisis globales que la del promedio de Latinoamérica y el Caribe: el crecimiento económico promedio de las últimas décadas ha sido de 3.4 %, y solo ha reportado caídas en 1999 (-4.2 %) —por la crisis económica y financiera colombiana originada por su mercado hipotecario— y en 2020 (-7.3 %) por la pandemia. Colombia ha tenido un crecimiento promedio por encima de Latinoamérica y el Caribe, +2.3 puntos porcentuales desde el 2011 a 2022.

Figura 2.1.1

Evolución del PIB

Paridad de poder adquisitivo, \$ precios internacionales constantes 2022



Fuente: The Conference Board
Eje izquierdo: PIB total; eje derecho: crecimiento del PIB.

No obstante lo dicho, la última década exhibe periodos de desaceleración del crecimiento económico luego de un periodo de crecimiento sostenido. Así, de 1991 a 2000 el crecimiento promedio del PIB en Colombia fue de 2.9 %; en 2001 a 2010 alcanzó 4 %; y en el lapso 2011-2020, 2.5 %. La década de 2001-2010 fue la de mayor crecimiento promedio a pesar del impacto de la gran recesión mundial de 2008 (en adelante, la Gran Recesión); y desde 2011 a 2017 puede observarse una desaceleración seguida de un aumento en el crecimiento económico que concluye con la caída (-7.3 %) ocasionada por la pandemia de la Covid-19 en 2020. A pesar de la crisis sanitaria, en 2021 el crecimiento alcanzó el 11 %, el más alto en el periodo analizado y por encima de la región, muestra de la resiliencia de la economía colombiana ante las crisis globales (FMI, Artículo IV). Para 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento de 1 %, desaceleración que puede redundar negativamente en el crecimiento productivo del país.

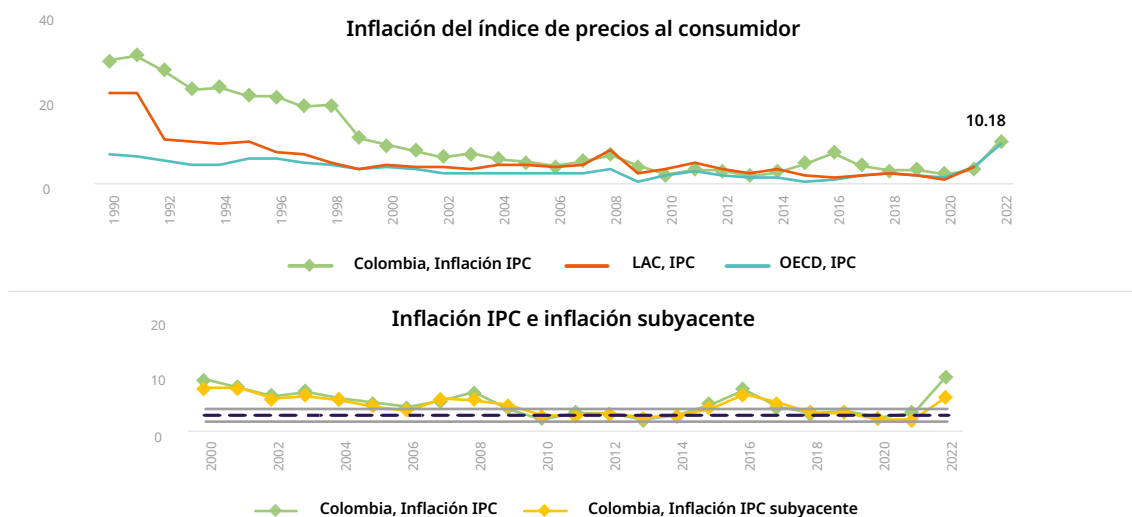
Por su parte, la estabilidad de precios denota un ambiente propicio para la productividad. Además, una mayor productividad conlleva una presión a la baja sobre la inflación al reducirse el costo por unidad, y aumentar la oferta de productos y servicios (WEF, 2022). Al igual que en otras economías de la región, Colombia atravesó un periodo de alta inflación a principios de los años noventa: en 1991, esta alcanzó el 30.4 %, por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe (21.5 %); mientras que en las últimas dos décadas (2001-2021) su promedio ha sido más estable: 4.6 %. Sin embargo, de manera similar a lo ocurrido en economías del mundo desarrollado (OCDE, 9.6 % en 2022), el país ha experimentado una subida de inflación en 2022 de 10.2 %, con proyección de no estabilizarse dentro de las bandas de inflación objetivo (3 %, con desviación admisible ± 1 %) hasta 2024 (FMI, Artículo IV; BanRep, 2023).

La inflación subyacente es usada como señal de la tendencia real de la inflación a largo plazo, ya que se calcula excluyendo los ítems más volátiles del índice de precios al consumidor, tales como energía y alimentos. Esta inflación se sitúa en niveles similares al general, con excepción de años recientes: si bien de 2010 a 2020 la diferencia entre ambas medidas no varió en ± 1 punto porcentual, a partir de 2021 la diferencia entre la inflación general y la subyacente aumenta y, por su parte, las expectativas de inflación para los próximos 24 meses van en declive, aunque desde abril de 2022 han estado por encima de las bandas de inflación objetivo. Tomando toda esta información en cuenta, a pesar de la volatilidad reciente puede esperarse estabilidad de precios en Colombia. Hay que recordar que la inestabilidad de precios está relacionada con la capacidad de la política monetaria de un país, las tasas de interés, los estándares de vida, la rentabilidad de las empresas y otros elementos que influyen en la creación de un entorno empresarial propicio para la productividad. Destaca la independencia y alto nivel de confianza del Banco de la República (el Banco Central), situación que no ha variado con el cambio de Gobierno (ANDI, 2023).

Figuras 2.1.2 y 2.1.3

Inflación anual IPC e Inflación subyacente

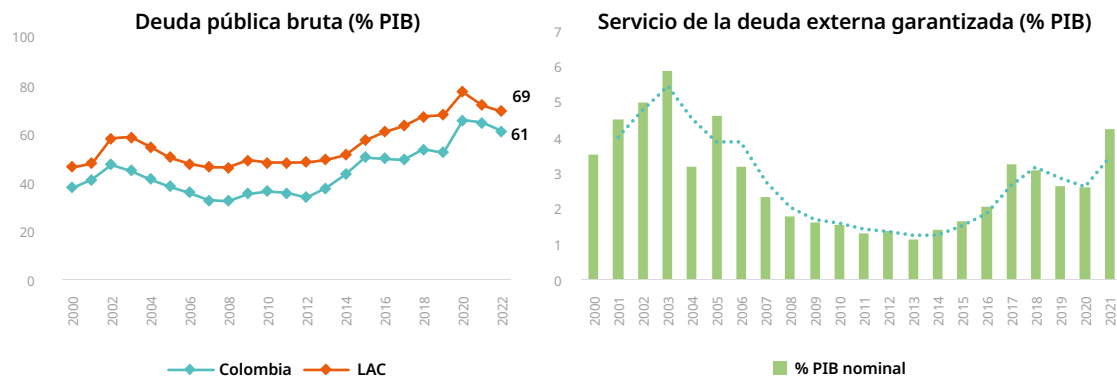
Porcentaje anual



La deuda pública puede usarse como instrumento para desarrollar proyectos y programas que impulsen la productividad y, a su vez, lleven a un mayor crecimiento económico que disminuya los riesgos de una deuda no sostenible (FMI, 2020). Por su parte, un alto endeudamiento puede significar una alta presión de repago y montos anuales en servicio de deuda que sobrecarguen las finanzas públicas. Colombia es un país con un alto nivel de endeudamiento —aunque por debajo del de la región—, endeudamiento que, además, ha venido creciendo en las últimas dos décadas: mientras en el año 2000 la deuda pública bruta representaba el 38 % del PIB, en 2022 ascendía al 61 %. Sin embargo, desde 2014 el servicio de deuda externa⁵ ha vuelto a aumentar, llegando a alcanzar el 4.2 % del PIB nominal (aunque por debajo de su máximo en 2003: 5.9 %). Mientras más recursos del presupuesto general anual se dediquen al servicio de la deuda, menos disponibilidad habrá para invertir en acciones que incentiven la productividad y otras prioritarias para el país. Se espera que la deuda pública y los servicios asociados disminuyan en los próximos años (FMI, Artículo IV).

Figuras 2.1.4 y 2.1.5

Deuda pública bruta y Servicio de la deuda externa garantizada



Fuente: FMI, World Economic Outlook y Banco Mundial, International Debt Statistics.

Dentro de las variables analizadas, Colombia se presenta como un país con estabilidad macroeconómica que se ha podido mantener dentro de las bandas de inflación objetivo a nivel de política monetaria y estabilidad de precios. En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, aunque se encuentra en niveles aceptables, es preciso estar atentos al riesgo de retornar a un crecimiento desacelerado y a tasas moderadas que puedan indicar un crecimiento débil de la productividad del país. Otra área de repercusión en la estabilidad macroeconómica es la estabilidad de las tasas de cambio: el peso colombiano se ha ido depreciando y ha presentado volatilidad (BanRep, 2022).

2.2. Desarrollo de habilidades y calidad educativa

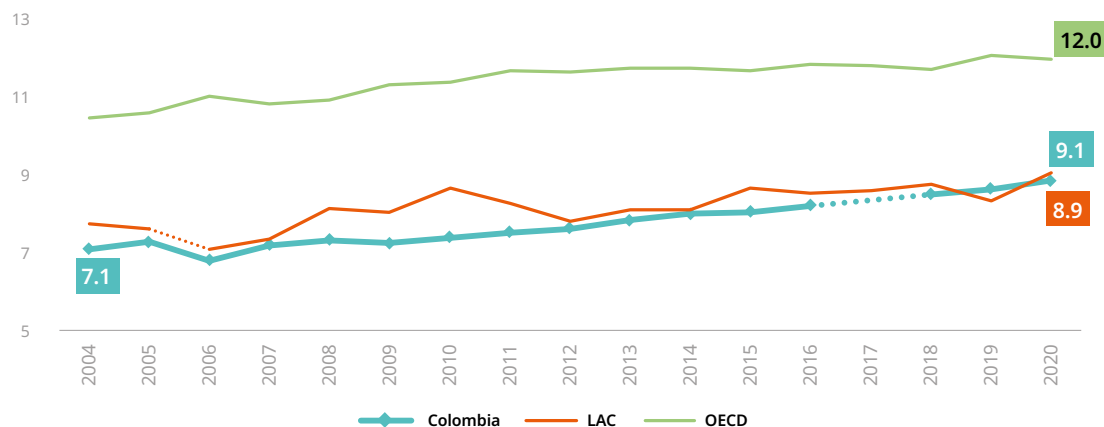
La educación es uno de los factores más determinantes de la productividad de un país, ya que constituye el fundamento de una fuerza laboral capacitada y de alto valor agregado (OIT, 2020; CBI, 2017; Becker, 1994). Para conocer el estado de las habilidades y la calidad de educativa de Colombia así como la brecha de habilidades de la fuerza laboral, en esta sección se exploran distintos indicadores.

⁵ Para este análisis, el servicio de deuda externa se refiere a la suma de los pagos de capital e intereses sobre las obligaciones garantizadas por una entidad pública. Para más información, consultar Banco Mundial-International Debt Statistics.

Figura 2.2.1

Años promedio de educación

Población 25+



Fuente: Unesco

El promedio de años de educación es una medida que indica el potencial de un empleado de producir alto valor agregado (OIT, 2020). Si bien en Colombia este promedio ha ido aumentando a través del tiempo —pasando de 7.1 años en 2004 a 8.9 en 2020—, los años de escolaridad se han mantenido por debajo de Latinoamérica y el Caribe (9.1), e incluso más distantes de los países de la OCDE (12.0). Hay que considerar que 8.9 años de escolaridad suponen una educación preuniversitaria inconclusa, lo que sugiere que un gran número de colombianos carece de las habilidades técnicas y competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral de manera adecuada e impulsar la productividad en sectores de alto valor agregado que requieren mano de obra más preparada.

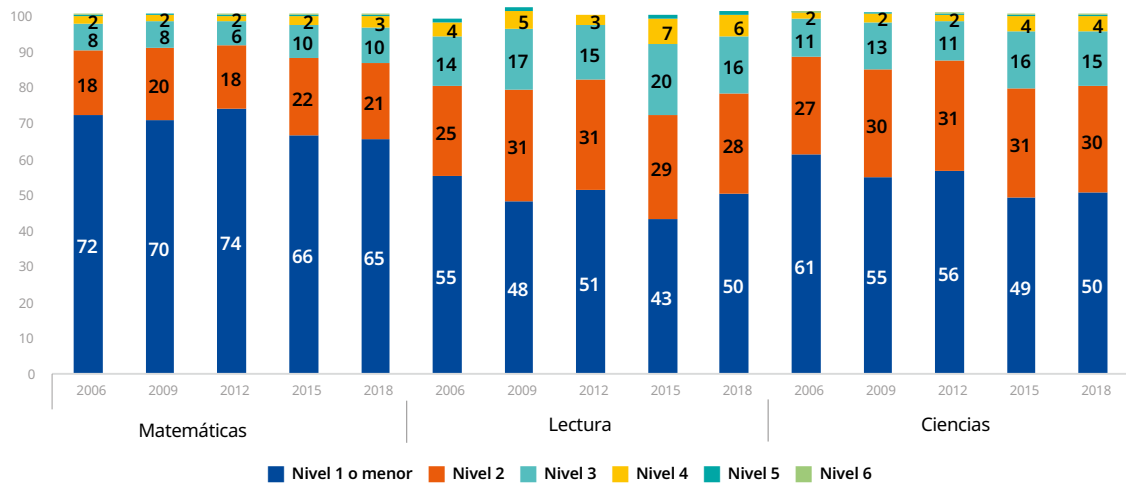
Si bien es necesario aumentar la cantidad de años promedio, no lo es menos que la educación brindada sea una de calidad, que otorgue las competencias necesarias para el desarrollo de las personas y las economías. Al respecto, las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) son una herramienta acreditada para medir la calidad educativa de un país. En el caso de Colombia, en las últimas cinco pruebas PISA el desempeño más bajo se ha presentado en Matemáticas, área en la que, en promedio, el 70 % de los estudiantes alcanzó el nivel 1 o menos de competencia; en Lectura, 49 %; y en Ciencias, 54 %. Llegar al nivel 1 o menos significa que las competencias son deficientes, mientras el nivel 2 es considerado como el nivel mínimo de competencias académicas que deben tener los estudiantes. El promedio de las cinco pruebas para Colombia en el nivel 2 alcanza el 20 % en Matemáticas, 29 % en Lectura y 30 % en Ciencias.

En general, existe una tendencia a la mejora en las últimas dos pruebas, en las que se ha alcanzado una mayor proporción de estudiantes con un desempeño igual o superior al nivel 2. Si se compara la prueba PISA 2018 con la de 2015, el desempeño promedio mejoró ligeramente en Matemáticas, pero empeoró moderadamente en Lectura y ligeramente en Ciencias. Colombia no reporta un número significativo de estudiantes en la categoría de altas competencias (que alcancen el nivel 4 en por lo menos una prueba): en promedio, apenas un 5 % alcanza esta clasificación en la prueba de Lectura. Según los resultados de las pruebas PISA 2018, el 36.2 % de los niños colombianos que alcanzan el nivel 4 esperan ser profesionales de Ciencias e Ingeniería a sus 30 años, 10 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE. En contraste, solo el 9 % de las niñas en este nivel aspira a estas profesionales, 4.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Estos datos demuestran que mejorar la calidad educativa y abordar la brecha de género se traduciría en más profesionales en disciplinas de alto valor para el país. Para concluir, se reporta que solo el 1.5 % de los estudiantes colombianos en PISA 2018 alcanzó un alto desempeño (nivel 5 o 6) en por lo menos una prueba, en contraste con el 15.7 % en promedio de la OCDE.

Figura 2.2.2

Pruebas PISA

Porcentaje de estudiantes por prueba y nivel de competencia alcanzado

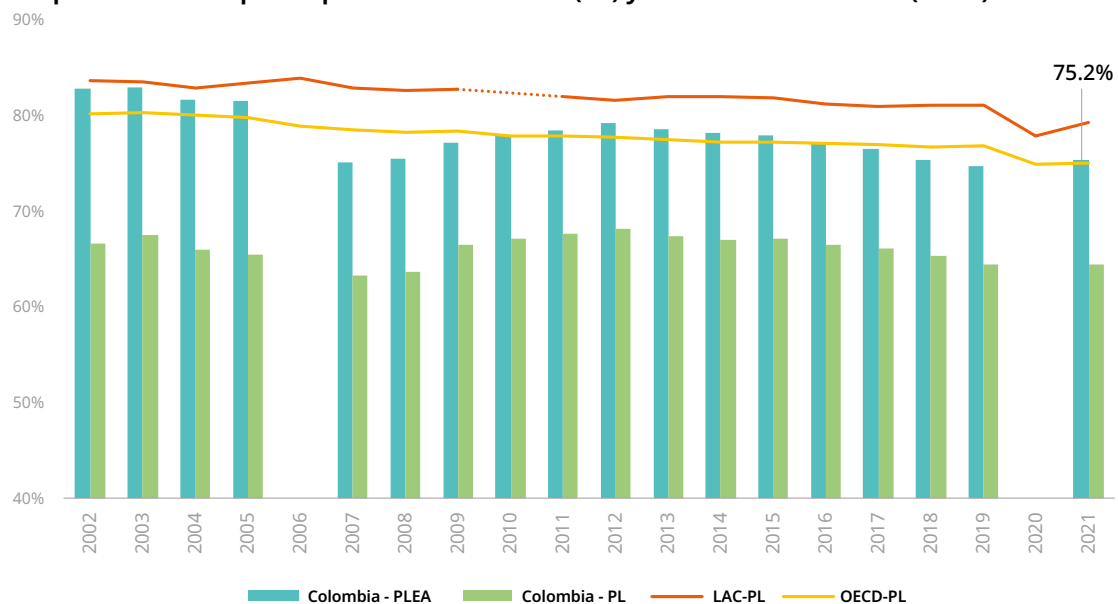


Fuente: Pruebas PISA OCDE

Invertir en más y mejor educación tiene un efecto explícito en el mercado laboral colombiano: la participación laboral de personas con educación avanzada (PLEA), es decir, con educación terciaria de corto plazo o mayor, es superior a la participación laboral total del país. Así, en el año 2021 la PLEA ascendía a 75.2 % y la participación laboral total a 64.3 %, una diferencia de 10.9 puntos porcentuales. Adicionalmente, en 2021 la PLEA de Colombia supera la participación laboral total de los países de la OCDE, que ese mismo año fue de 74.9 %. Estos datos demuestran que el aumento del número de personas con educación avanzada en Colombia influye en el crecimiento de la participación laboral total, que en los años recientes se ha ubicado por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe.

Figura 2.2.3

Comparativo entre participación laboral total (PL) y educación avanzada (PLEA)⁶



Fuente: Ilostat

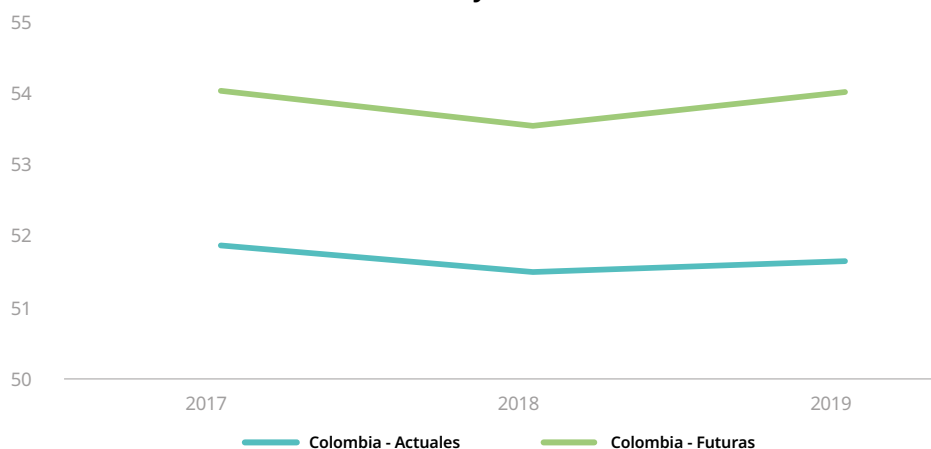
⁶ La participación laboral con educación avanzada se calcula dividiendo la fuerza laboral con educación avanzada entre la población en edad de trabajo (de 15 a 64 años) con educación avanzada.

Un área que resalta la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) es el desajuste entre las habilidades de los graduados y las necesidades de las empresas, en especial en cuanto a los jóvenes y su primer trabajo (ANDI, 2023). Según el *Informe sobre el futuro del empleo 2023* del Foro Económico Mundial (FEM), el 80 % de las compañías que operan en Colombia espera una oferta de talento insuficientemente calificada para 2027 (WEF, 2023). Díaz y Salas (2020) estudiaron las principales brechas de habilidades de los jóvenes colombianos (15 a 25 años) y mayores de 25 usando 323 mil vacantes completadas ofrecidas entre 2016 y 2019, y encontraron que tanto los jóvenes como los mayores de 25 años tienen, en promedio, 1.5 años de educación por encima de lo que solicita la vacante; y que los jóvenes, si bien cuentan con una menor brecha en habilidades transversales (cognitivas y blandas), poseen un mayor desajuste en las habilidades específicas para el trabajo. Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reporta, a 2021, una brecha de habilidades digitales de 0.56/1 (considerando que la brecha es menor cuanto más cercana a 0), que en Bogotá llega a 0.29. Las habilidades medidas por este índice incluyen las de operar y comunicarse en medios digitales; utilizar las tecnologías para el propósito para el que fueron diseñadas; manipular y editar; y buscar y evaluar información.

Colombia posee una tradición de programas de pasantías y aprendizaje profesional que representan más del doble del promedio mundial reportado, que es de 19 % (WEF, 2023). Tales programas son fomentados por las organizaciones empresariales y por el contrato de aprendizaje (Ley nro. 789 de diciembre de 2002), que vincula a los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las universidades con prácticas en las empresas relacionadas con su tema de estudio. Las empresas que poseen quince o más empleados tienen la obligación de contratar aprendices o, de lo contrario, son multadas. Estos contratos no generan relación laboral y son de corta duración (seis meses).

Figura 2.2.4

Habilidades de la fuerza laboral actual y futura



Fuente: Foro Económico Mundial, índice de competitividad global.

El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial da una idea del desajuste entre las habilidades demandadas por los empleadores en cuanto a la fuerza laboral actual y futura: mientras en 2017 la fuerza laboral actual de Colombia alcanzó un puntaje de 51.9/100, a 2019 se colocó en 51.7/100; es decir, no hubo cambios significativos. Esta situación llevó al país a un retroceso de 11 escalones en el ranking mundial para este indicador, específicamente al puesto 69 de 141 países. Las expectativas de una fuerza laboral futura que satisfaga las habilidades necesarias también se han mantenido con pocos cambios, lo que llevó al país a bajar 6 puestos en el ranking (84 de 141 países). Para fines comparativos, en este último indicador algunos de los resultados para el 2019 fueron: Costa Rica, puesto 34; Argentina, 56; Chile, 71; Ecuador, 93; México, 102; y, por su parte, Singapur, 3; y Estados Unidos, 12 (WEF, 2019). Se precisa que este indicador no implica una comparación del nivel de habilidades entre los países, sino que mide la percepción de los empleadores sobre el desajuste de las habilidades en sus países.

2.3. Mercados laborales inclusivos y flexibles

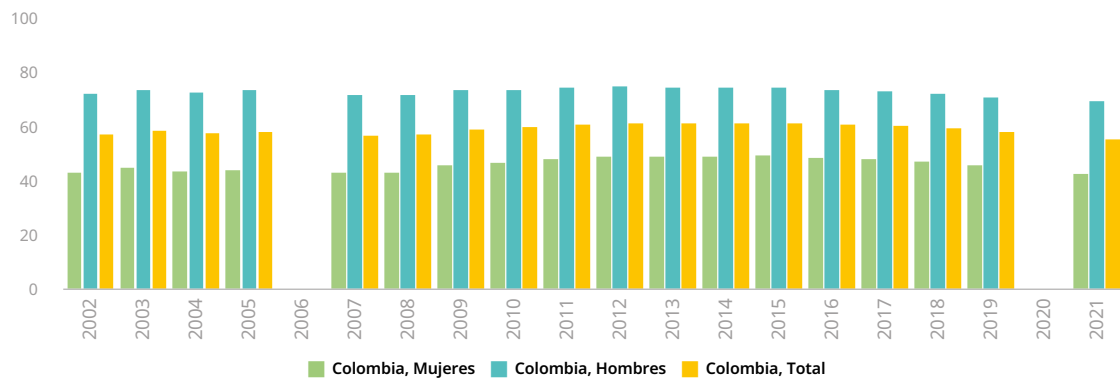
En general, algunos grupos como las mujeres; las personas jóvenes, mayores, con discapacidades y de color; y los trabajadores con habilidades bajas permanecen desempleados o subempleados, y, asimismo, enfrentan mayores barreras y discriminación laboral (OCDE, 2013; FMI, 2021; OIT, 2022a). Esto deviene no solo en el desaprovechamiento de recursos y talentos, sino que resulta nocivo para los integrantes de estos grupos, que sufren más durante las crisis (OIT, 2022a; OCDE, 2022b), a pesar de que numerosos estudios han demostrado el efecto positivo de incluirlos e invertir en ellos. Por ejemplo, Hsieh et al. (2019) estiman que mejorar la distribución del talento en Estados Unidos entre 1960 y 2010 explica del 20 al 40 % del crecimiento de su PIB. Esto significa que muchas personas, no obstante poseían las habilidades y el talento necesarios, no podían acceder a ciertas profesiones y, por tanto, su potencial productivo estaba siendo desaprovechado.

En Colombia existe una brecha histórica en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres, con una diferencia promedio de 26.8 puntos porcentuales de 2002 a 2021: en 2002, la tasa de ocupación de las mujeres era de 43 % y la de los hombres de 71.9 %, y en 2021 se mantuvo en nivel similares, aunque con una ligera disminución (42.4 % para las mujeres y 69.2 % para los hombres). Incluir a las mujeres y aumentar la diversidad de género reportan beneficios económicos mayores que los estimados (entre 10 y 80 %, dependiendo de la participación laboral inicial), así como un crecimiento de sectores más productivos, como por ejemplo Servicios (FMI, 2018). La evidencia empírica demuestra que la mayor participación laboral de las mujeres contribuye a incrementar los niveles de productividad (Koyuncu et al. 2016; Akbulut, 2011), por lo que es preciso implementar políticas que promuevan su inclusión laboral.

Figura 2.3.1

Tasa de ocupación

Porcentaje de empleo a población laboral

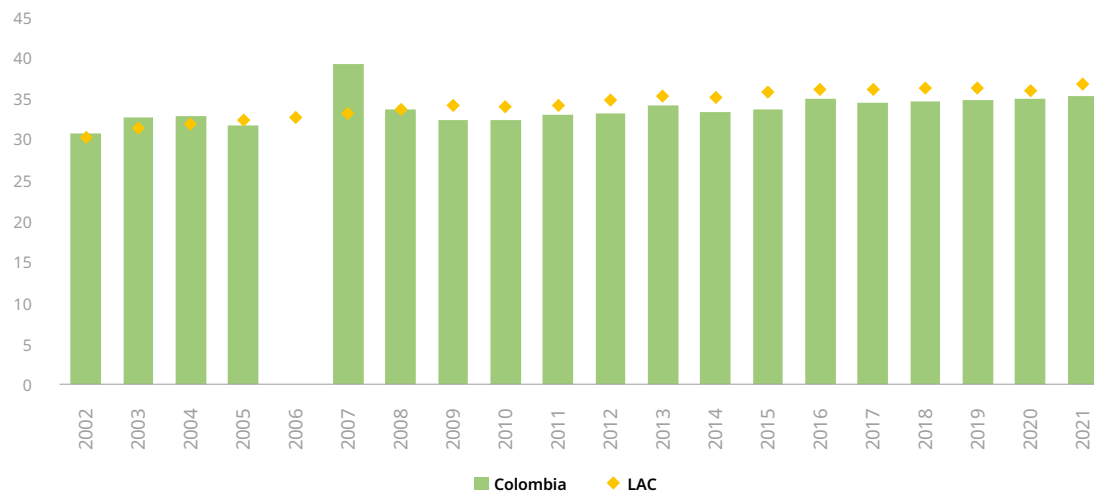


Fuente: Ilostat

A pesar de la desigualdad ocupacional, las mujeres colombianas se han mantenido representadas en los puestos de gerencia con un promedio de 33.9 % en este tipo de cargos entre 2020 y 2021, aunque aún lejos de la paridad. La máxima participación alcanzada fue de 39.3 % en 2007 y la mínima, de 30.8 % en 2002. Desde 2010, año en que se presentan datos agregados de la OCDE, el promedio hasta 2021 de este bloque de países ha sido de 32.2 %. Para 2021, con 35.3 %, Colombia alcanza un promedio superior al de la OCDE (33.7 %) pero inferior al de Latinoamérica y el Caribe (36.9 %). Una fuerza laboral distribuida de manera más equitativa conduce a un mayor crecimiento de la productividad debido a la incorporación de estilos de gerencia que tienden a incrementar los niveles de hospitalidad, profesionalismo, eficiencia y motivación (Wu y Cheng, 2016). Las mujeres en cargos directivos (CEO) pagan salarios que se corresponden mejor con los niveles de productividad de los trabajadores y, asimismo, promueven la mentoría, lo que se traduce en un mejor desempeño de las compañías (Flabbi et al., 2019).

Figura 2.3.2

Porcentaje de mujeres en puestos de gerencia



Fuente: Ilostat

En el caso de las mujeres ocupadas en Colombia, en 2021 la brecha salarial se situó en un promedio mensual de 6.3 % (DANE y OIT, 2023), menor que la de los países de la OCDE (12 %). Las mayores brechas se encuentran en mujeres de bajo nivel educativo, que residen en zonas rurales, de etnicidades afrodescendientes y que viven en hogares con menores de 18 años, así como en escalas salariales altas (DANE y OIT, 2023; OCDE, 2022). La brecha salarial para mujeres sin ningún tipo de estudios es de 39.3 % y, en el caso de las mujeres rurales, 28.4 %. Un dato positivo es que dentro de la población asalariada que trabaja a tiempo completo (40 horas o más), la brecha es de 4 % a favor de las mujeres y se mantiene en la mayoría de las desagregaciones. La brecha también está a favor de las mujeres en las empresas medianas y pequeñas; es decir, las que cuentan con menos de 200 empleados (DANE y OIT, 2023).

El sector empresarial ha ido contribuyendo a cerrar la brecha de género: según una encuesta recurrente de equidad de género realizada por la ANDI a 250 empresas en 2023, el 59.2 % poseía una política de equidad, diversidad e inclusión; el 45.2 % medía su situación en estos aspectos (31.3 % en 2021); y un 41.6 % contaba con presupuesto asignado para implementar acciones en estas áreas, que ascendía a 25.7 % en 2022 (ANDI, 2023b).

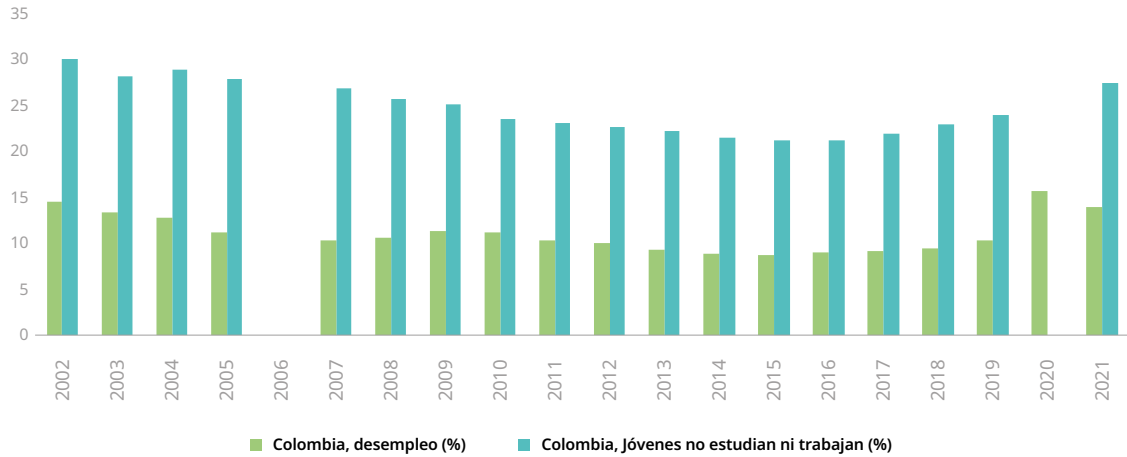
En Colombia, el desempleo promedio ha sido alto: 10.98 % entre 2002 y 2021, y 11.2 % en 2022; y alcanzó el 17.5 % en el caso de las mujeres en 2021 (DANE y OIT, 2023). Las personas jóvenes integran uno de los grupos más afectados por el desempleo y de los que se han recuperado más lentamente de la Covid-19 (OIT, 2022b; OCDE, 2022b): el desempleo joven (15 a 28 años) alcanzaba el 21.1 % a diciembre de 2021 (DANE). La proporción de jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados ha sido, en promedio, de 24.57 %. Desde 2002, año en que esta proporción alcanzó el 29.94 %, se ha experimentado una disminución sostenida hasta llegar al año 2016, con 21.13 %. A partir de 2017 empieza un aumento que llegó a 27.26 % en 2021, un nivel que no se había visto en más de una década y que, en parte, respondió a la crisis sanitaria.

Al igual que lo que ocurre con el empleo de la mujer, la entrada de jóvenes calificados al mercado laboral impacta positivamente en la productividad. Adicionalmente, el empleo joven produce efectos económicos y sociales favorables tales como la integración social, el fomento de la ciudadanía y la estabilidad política, y la reducción de la pobreza (Dietrich, 2012; Azeng y Yogo, 2013).

Figura 2.3.3

Desempleo total y proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan

Porcentaje

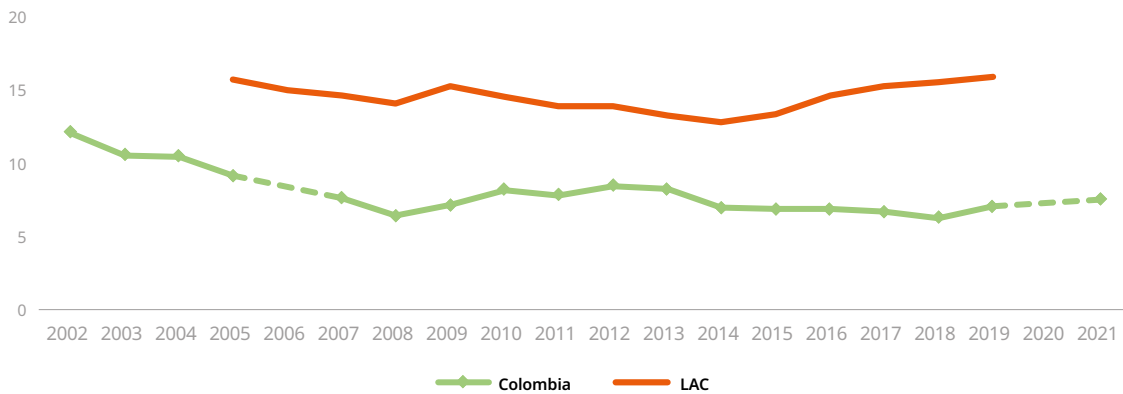


Fuente: Ilostat

Figura 2.3.4

Subempleo

Porcentaje



Fuente: Ilostat. Las líneas quebradas son estimados lineales.

El subempleo⁷, de acuerdo con la OIT, hace referencia a aquellas personas ocupadas que estarían dispuestas a trabajar más horas, estarían disponibles para trabajar horas adicionales y trabajaron por debajo de la cantidad de horas establecidas en el país. El subempleo ha presentado un comportamiento cíclico consonante con las crisis económicas recientes: disminuyó hasta el año 2008 (6.41 %) para luego subir durante la Gran Recesión y volver a incrementarse durante la pandemia de la Covid-19, llegando a un 7.5 % en 2021. El subempleo objetivo, calculado por el DANE en base a horas e ingresos inferiores, alcanzó el 10.9 % en 2021. Si bien Colombia se encuentra en una mejor posición que el promedio regional, el subempleo refleja que la fuerza laboral no está alcanzando la productividad que podría si tuviera

⁷ Este análisis del subempleo sigue la definición de Ilostat de subempleo relacionado con tiempo. Los criterios que se consideran en este indicador son: a) dispuestos a trabajar horas adicionales; b) disponibles para trabajar horas adicionales; y c) trabajaron horas por debajo del criterio país.

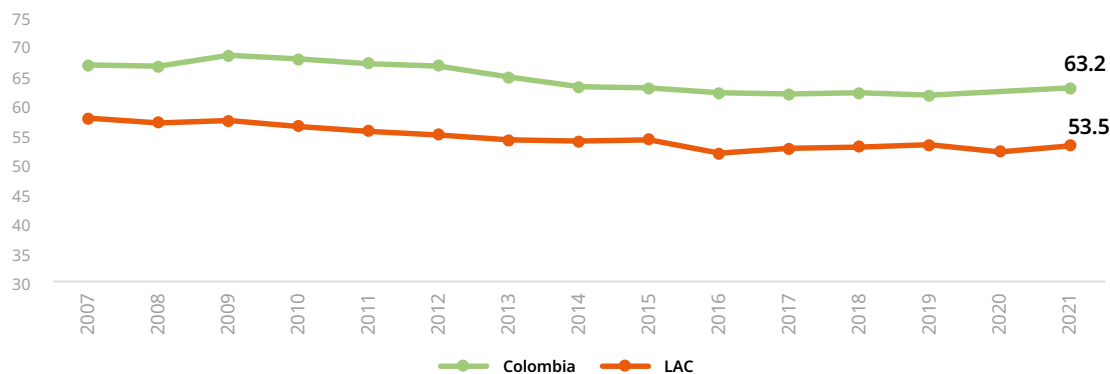
la oportunidad de trabajar jornadas completas. El caso de una brecha salarial menor y a favor de las mujeres que trabajan a tiempo completo (brecha de +7.9 %) frente a las que trabajan 20 horas a la semana (brecha de -34.2 %) es un indicador de esta conclusión (DANE y OIT, 2023).

2.4. Transición para salir de la informalidad

Con la Recomendación nro. 204, la OIT busca que los Estados miembros se enfoquen en facilitar la transición para salir de la informalidad, crear nuevos trabajos formales y prevenir mayor informalidad (OIT, 2015). Como punto de partida, esta recomendación motiva a medir y evaluar los factores y características de la informalidad en cada contexto nacional.

Figura 2.4.1

Proporción del empleo informal



Fuente: Ilostat y Cepal. Promedio simple para Latinoamérica y el Caribe reportado por Cepal.

Mientras que Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por presentar altos niveles de empleo informal —con una proporción promedio superior al 50 %—, Colombia exhibe aun mayores niveles que la región, al alcanzar un promedio de 64.9 % de empleo informal sobre empleo total. Aunque el periodo analizado ha presentado un declive en los últimos años, el nivel se ha mantenido históricamente superior al 60 %.

Hasta julio de 2022, el DANE calculaba la informalidad en Colombia sobre la base de 13 o 23 ciudades y áreas metropolitanas. De acuerdo con esta metodología, la informalidad se reportaba al 48 % para 2021 para 23 ciudades y áreas metropolitanas. En julio de 2022, el DANE actualizó su metodología para incluir un total nacional, y es así que para 2021 reporta la informalidad en 60.1 % y, para 2022, en 58 %, datos que se acercan más a los obtenidos por la OIT. Adicionalmente, en 2015 se estimó que un 13.2 % de las personas trabajadoras informales de Colombia se encontraba en pobreza extrema en comparación con un 1.3 % en el sector formal (OIT, 2018).

La informalidad predomina en los grupos más vulnerables y los afecta de manera más marcada (Banerjee y Duflo, 2011). En Colombia no existe una brecha notoria por género en cuanto a informalidad que, para 2021, fue de -2 puntos porcentuales en el caso de las mujeres y de +1.4 puntos porcentuales en el caso de los hombres. Se observa que los menos educados (+20.5 puntos porcentuales en el nivel básico), las personas residentes en zonas rurales (+21.4 puntos porcentuales), las personas jóvenes de 15 a 24 años (+10.6 puntos porcentuales) y los mayores de 65 años (+21.6 %) exhiben una proporción de informalidad mayor a la total de 63.2 % a 2021. Esta brecha aumenta aun más si se compara a aquellos con un nivel

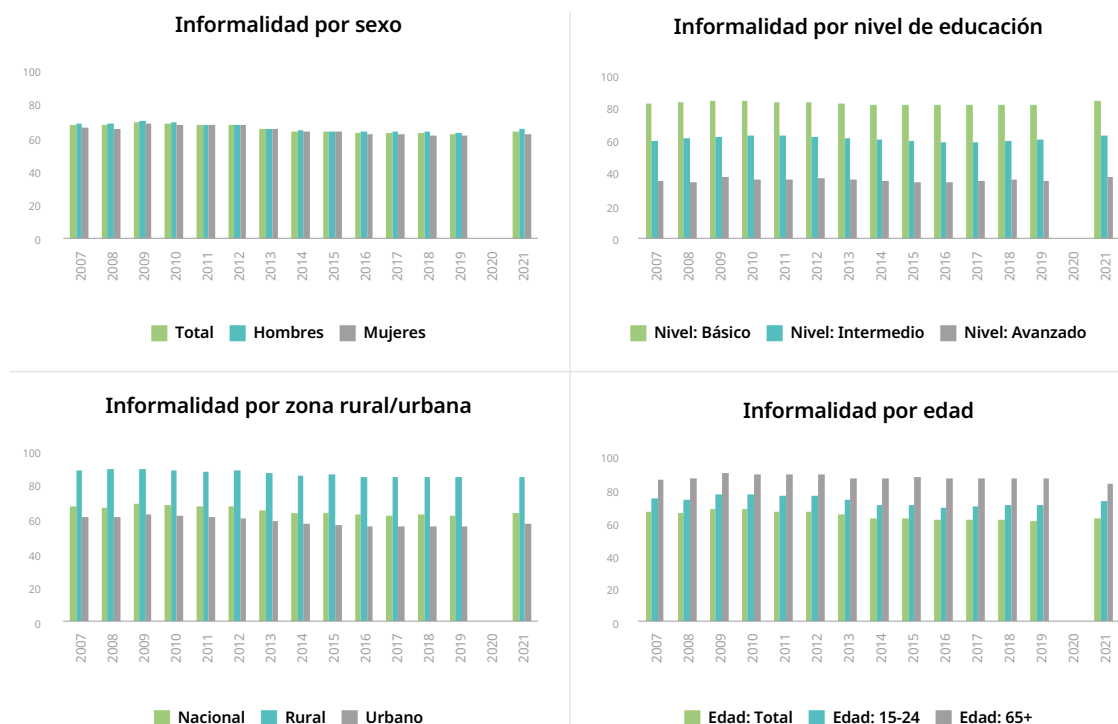
básico de educación con los que han recibido educación avanzada (+46.6 puntos porcentuales). Los estimados actualizados del DANE presentan diferencias similares en la brecha de género (+1.2 puntos porcentuales en hombres) y superiores a nivel de territorio (+27 puntos porcentuales).

Por su parte, los datos nacionales ofrecen detalles sobre la informalidad laboral por empresa: a 2022, las microempresas presentaban una tasa de informalidad laboral de 85.3 %; las empresas pequeñas, de 24.8 %; las medianas, un 8.7 %; y las grandes empresas, 5.7 %. En 2015, el DANE estimó que la economía no observada (que incluye las unidades informales, subterráneas, ilegales y de consumo final propio en los hogares) representaba cerca del 23 % de la producción nacional (DANE 2021). El número de empresas informales se estima en 60 % del total (Fernández, 2020).

La informalidad produce efectos nocivos en los derechos de los trabajadores relacionados con la protección social, condiciones laborales decentes y el amparo de un Estado de derecho. Además, impacta de forma negativa en el desarrollo de empresas sostenibles, especialmente en cuanto al acceso al crédito, y determina una baja productividad (La Porta y Shleifer, 2014; OIT, 2018; Ulyssea, 2020; Masello, 2021). Por tanto, abordar la informalidad laboral no solo constituye un mecanismo de fomento de la productividad, sino también de desarrollo, cohesión social y reducción de la pobreza.

Figuras 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5

Proporción de trabajo informal a empleo total por sexo, nivel de educación, zona rural-urbana y edad



Fuente: Ilostat

La informalidad es una realidad compleja que afecta negativamente los niveles de productividad de las empresas y el crecimiento de las economías. En el caso de las empresas, les dificulta el acceso a capital, la adopción de tecnología, la inversión en expansión del negocio y la participación en mercados internacionales (Ulyssea, 2020; Loayza, 2010). La informalidad puede también suponer una cultura de evasión fiscal, incumplimiento legal e ineficiencia en los procesos productivos (Ulyssea, 2018; Loayza, 2018). A su vez, si bien algunas empresas lucen formales en sus registros, pueden contratar empleados por fuera de las vías formales, lo que contradice la meta de reducción de la informalidad laboral.

La literatura emergente reconoce tres tipos de firmas que operan en la informalidad: pequeñas unidades de subsistencia que, por su composición o realidad, no operan formalmente; empresas que podrían operar formalmente y ser productivas pero a las que se les dificulta formalizarse por los altos costos y cargas regulatorias; y las que eligen permanecer en la informalidad para aprovechar y evadir costos (Fernández, 2022; Ulyssea, 2018; Loayza, 2018). Algunos autores han encontrado evidencia empírica de la prevalencia de estos tres tipos de empresas informales en la región: Fernández (2022) en Colombia y Ulyssea (2018) en Brasil. Así, en Colombia el estudio de Fernández estima que un 22 % de las firmas informales se encuentra en la categoría de subsistencia y un 13% entre las que tienen dificultades para formalizarse por las altas cargas regulatorias. Adicionalmente, un 65 % recae en firmas que podrían operar formalmente, pero prefieren la informalidad. En el caso de Brasil, Ulyssea estima un 11.5 % de firmas limitadas por las cargas regulatorias, 35.9 % que prefieren permanecer en la informalidad y 52.6 % en subsistencia. Estos resultados demuestran que el desarrollo de políticas públicas y acciones para combatir la informalidad de las unidades económicas deben considerar estas realidades y complejidades junto al contexto de cada país. En el caso de Colombia, se reportan bajos costos fijos para la formalización, lo que se refleja en la baja incidencia de firmas en la categoría de subsistencia en comparación con Brasil (Fernández, 2022).

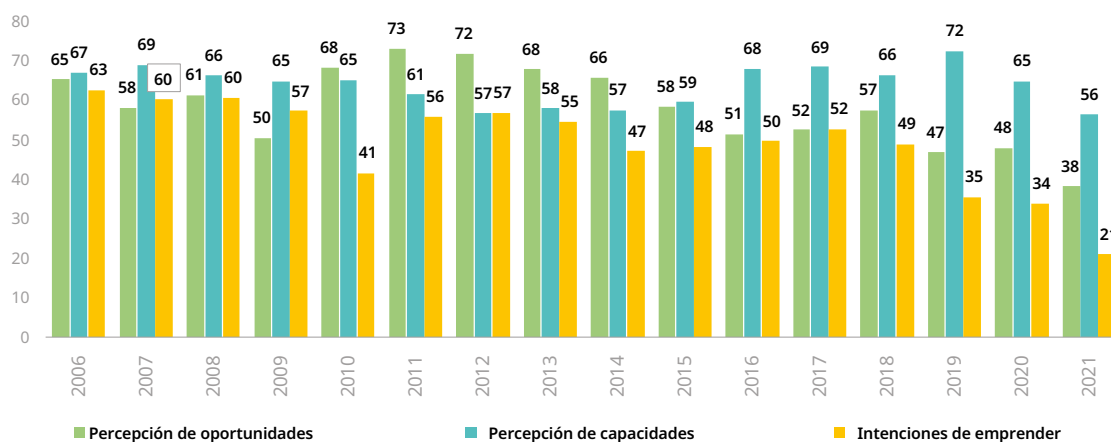
2.5. Emprendimiento e innovación

Los emprendimientos constituyen una parte vital del desarrollo y la productividad de un país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo existen los de oportunidad, sino también los emprendimientos de necesidad, que se dan cuando las personas se ven obligadas a iniciar un negocio debido a la falta de empleos decentes en sus economías. En general, este tipo de emprendimiento está asociado con la economía informal y una productividad menor (OIT, 2013; La Porta y Shleifer, 2014). De acuerdo con un estudio local apoyado por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)⁸, para 2021 cerca del 80 % de los emprendedores tanto nacientes como establecidos cita como motivación la necesidad —que se basa en tener que subsistir— así como la escasez de empleos adecuados (GEM, 2022). La siguiente motivación para los nuevos emprendedores es “marcar una diferencia en el mundo”, con cerca de un 65 %.

Figura 2.5.1

Indicadores de emprendimiento

Porcentaje de entrevistados



Fuente: GEM, Encuesta Entrepreneurial Behaviour and Attitudes.

En el año 2021, el 38,1 % de las personas entrevistadas en Colombia percibía buenas oportunidades para emprender una empresa en su localidad, mientras que el 56,2 % consideraba contar con las

⁸ La encuesta usada se llama Entrepreneurial Behaviour and Attitudes, y usa una muestra de la población adulta (de 18 a 64 años) para medir las intenciones de emprender. <https://www.gemconsortium.org/en/about/key-figures>

habilidades y conocimientos necesarios para empezar una empresa: ambos datos demuestran una brecha entre oportunidad y capacidad. Incluso más destacable es que una baja proporción, 20.9 %, tenía intenciones de empezar una empresa en los próximos tres años. Si bien no se ha presentado una tendencia clara de mejora o empeoramiento, se puede observar que luego de la Gran Recesión la percepción de oportunidades alcanza un máximo en la serie de 73.1 % y se mantiene alta por varios años, específicamente hasta 2016, cuando comienza a decrecer.

Por su parte, la percepción de capacidades se ha mantenido en 56 a 72 %, mientras que la intención de emprender ha mostrado un comportamiento de baja a partir de 2011. El año 2021 es el peor para los tres componentes en toda la serie, en parte por la pandemia de la Covid-19. De acuerdo con la ANDI, la intención y proporción de personas que emprenden son percibidas a un nivel más alto (ANDI, 2023). Resalta que de 2019 a 2021 se han presentado niveles por debajo del comportamiento histórico del indicador.

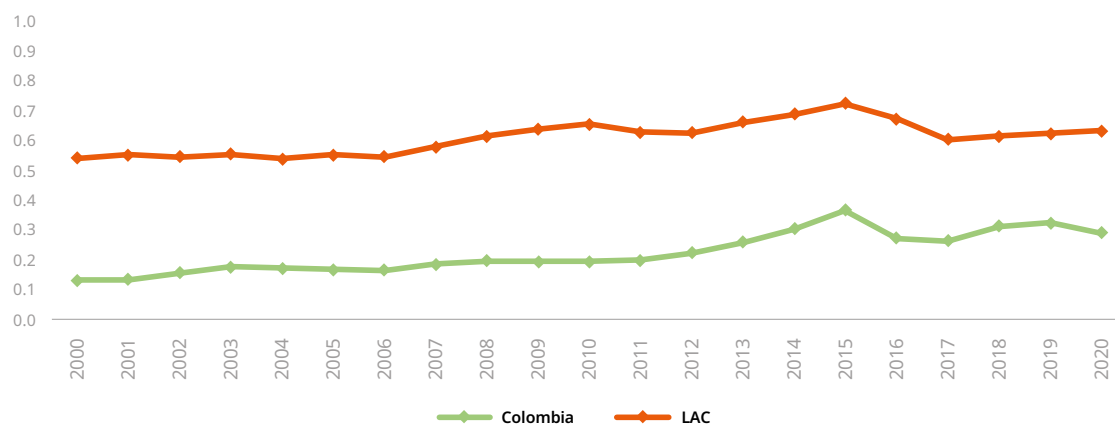
Así como el emprendimiento es clave para el crecimiento económico y productivo de un país, la innovación y la productividad van de la mano (Crespi y Zuniga, 2012; ECB, 2017). La innovación se relaciona con una variedad de factores y sectores económicos, así como con la creación y difusión de nuevos productos, procesos y métodos (OCDE, 2015), y repercute tanto en los nuevos emprendimientos (hay quienes definen el emprendimiento como el aprovechamiento de las innovaciones, tal es el caso de Bessant y Tidd, 2007) como en los procesos y comportamientos establecidos de las organizaciones (March, 1991). Algunas de las variables o indicadores que se utilizan para medir la innovación son la cantidad de patentes activas o concedidas en una economía y la inversión en investigación y desarrollo (I+D), regularmente expresadas en relación con el PIB.

El gasto en investigación y desarrollo ha ido aumentando progresivamente en el país, al pasar de 0.13 % del PIB en 2000 a 0.28 % en 2020, con un valor máximo en la serie de 0.36 % en 2015. Si a esto se agrega el crecimiento del PIB, se tiene que el valor absoluto de I+D ha aumentado. Sin embargo, este nivel de inversión se encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe, que en 2020 alcanzó un ponderado de 0.63 %, en parte debido a que Brasil invirtió un 1.17 % de su PIB en I+D en ese año. Por su parte, en comparación con la OCDE, Colombia se encuentra lejos del 2.7 % del PIB que invierte este bloque de países en promedio. Un gasto bajo en I+D sugiere una menor capacidad de innovación, lo cual, a su vez, se refleja negativamente en el potencial productivo del país. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para 2015 al sector privado empresarial le correspondía cerca del 45 % de la inversión en I+D del país, seguido por las instituciones de educación superior con 25 %, organizaciones sin fines de lucro con 20 %, y el Gobierno con 10 % (Unesco, 2020).

La ANDI, a través de su programa Innovación Más País, recolecta información y apoya a las empresas innovadoras de Colombia. En su versión de 2022, el programa contaba con 347 empresas que empleaban directamente a cerca de 380 mil trabajadores, cuyos ingresos representaban el 24 % del PIB del país (ANDI, 2022). Según sus datos, el 25.4 % de estas empresas pertenecen al sector Manufactura; el 25.6 %, a otras actividades de servicio; el 10.4 %, a Información y Comunicaciones; y el 10.1 % se dedica a actividades profesionales, científicas y técnicas. Al año 2021, estas empresas invertían en promedio el 5.6 % del total de sus ventas en actividades de ciencia, tecnología e innovación en contraste con el 2.7 % de 2016, con lo cual se aprecia que la inversión se ha duplicado. Gracias a ello, las empresas reportan que, en promedio, generaron un 20.3 % de ventas, empresas de las cuales el 33.9 % son pymes y el 18.4 %, *startups*. Esto datos, unidos a la contribución estimada en I+D, ubican al sector empresarial como un gran impulsador de la innovación en Colombia.

Figura 2.5.2**Gasto en investigación y desarrollo (I+D)⁹**

Porcentaje del PIB



Fuente: Unesco

Existe un consenso generalizado sobre el relevante papel que desempeñan el cambio tecnológico y la innovación para impulsar el crecimiento de la productividad. Desde los primeros modelos de crecimiento económico, se ha reconocido que la tecnología de vanguardia y las mejoras tecnológicas repercuten en el aumento de la productividad total de los factores (PTF), y se suele hablar de cuán cerca se encuentra una economía de la frontera tecnológica cuando se busca mejorarla (Moss et al., 2020). El índice de preparación para la tecnología calculado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) da una idea aproximada de cuán preparado está un país para aplicar y aprovechar la tecnología de punta. Este índice se compone de cinco áreas: infraestructura TIC (tecnología de la información y la comunicación), habilidades para la adopción tecnológica, I+D, actividad industrial y acceso a financiación. Los primeros tres componentes están relacionados con las capacidades internas de los países; por su parte, el componente de actividad industrial incluye las actividades relacionadas con la adopción o adaptación tecnológica, tales como manufactura, finanzas, TIC y manufactura de tecnología (Naciones Unidas, 2021). Finalmente, el quinto componente evalúa el financiamiento como mecanismo para innovar. Una puntuación de 0 en el índice supone el peor desempeño.

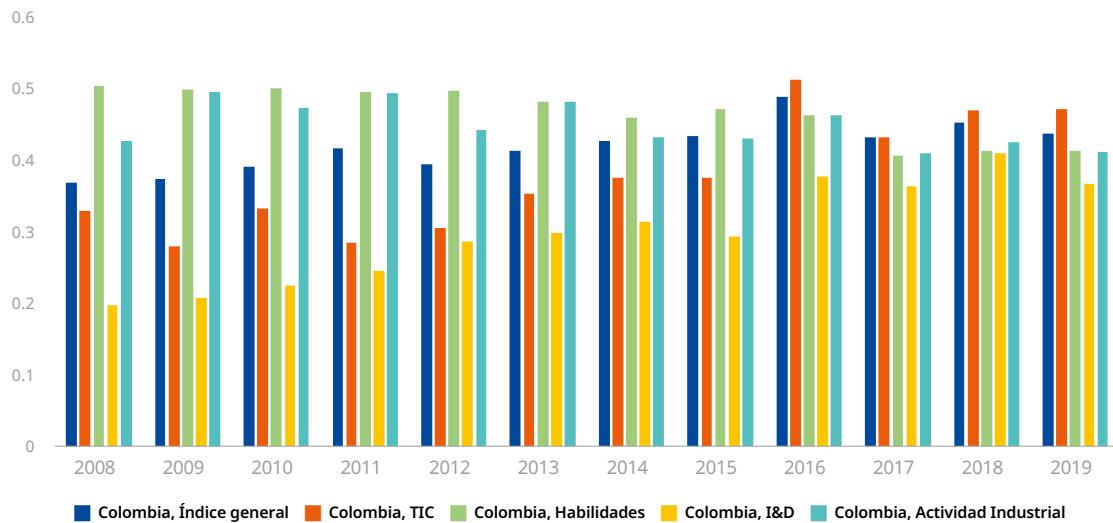
En el caso de Colombia, el índice presenta una tendencia alcista, al pasar de 0.37/1 en 2008 a 0.44/1 en 2019. Para este último año de la serie, el país se encontraba en un nivel superior al del promedio de Latinoamérica y el Caribe, de 0.37/1¹⁰, pero por debajo de otras grandes economías de la región como Brasil (0.65), Chile (0.57) y México (0.54), y de países cercanos como Panamá (0.49) y Costa Rica (0.51). Hay que notar que el subcomponente de habilidades ha mostrado una tendencia contraria al índice general, dado que en 2008 alcanzaba un puntaje de 0.50 y en 2019, de 0.41, lo que puede significar que la reserva de profesionales altamente calificados que se necesita para aprovechar estas tecnologías ha disminuido. Otra explicación es que se sigue esperando que los mismos profesionales (por ejemplo, ingenieros de sistemas) sean capaces de implementar estas tecnologías, que han evolucionado y se han especializado a un paso mayor que la educación que se otorga o se puede ofrecer sobre ellas (ANDI, 2023).

⁹ Basado en datos de la Unesco. El gasto en I+D incluye gastos por empresas, Gobierno, instituciones de educación superior, ONG y otros.

¹⁰ Cálculo propio sobre la base de un promedio simple de veintiséis países de Latinoamérica y el Caribe. Este promedio debe usarse como estimado ilustrativo.

Figura 2.5.3

Índice de preparación para la tecnología de punta Máximo=1.0



Fuente: Adaptado del Frontier Technology Index de la Unctad, índice calculado de 2008 a 2019.
No se presenta el subcomponente "acceso financiero", que se desarrolla en el siguiente apartado.

Al mismo tiempo, el subcomponente de tecnología de la información y la comunicación (TIC), que usa la penetración y calidad de la infraestructura de internet como aproximado, ha aumentado de 0.33 en 2008 a 0.44 en 2019. Por su parte, la actividad industrial se ha mantenido relativamente constante, con un puntaje promedio de 0.45/1 entre 2008 y 2019. Tal constancia puede indicar que las industrias, si bien han sido capaces de mantener su paso de adopción, no han incrementado la rapidez de tal adopción. Sin embargo, el programa Innovación Más País de la ANDI muestra que esta realidad es diferente para este subgrupo de empresas innovadoras, ya que presentan una adopción de vanguardia en varias tecnologías de punta (ANDI, 2022). Finalmente, el subcomponente de investigación y desarrollo se enfoca en el número de publicaciones y patentes en once fronteras tecnológicas a diferencia del gasto total en I+D, que abarca la temática de forma más amplia. Este rubro ha mejorado de 0.20 en 2008 a 0.37 en 2019.

2.6. Acceso al crédito y a servicios financieros

La relación entre el acceso al crédito y la productividad es bidireccional, y existe un ciclo de retroalimentación: por un lado, sin acceso al crédito y a servicios financieros, las empresas pueden enfrentar dificultades para financiar las inversiones que requieren para mejorar su productividad. Asimismo, la falta de financiamiento adecuado puede limitar su capacidad para adquirir tecnología, modernizar sus operaciones, capacitar a su personal, expandirse o llevar a cabo mejoras en su infraestructura.

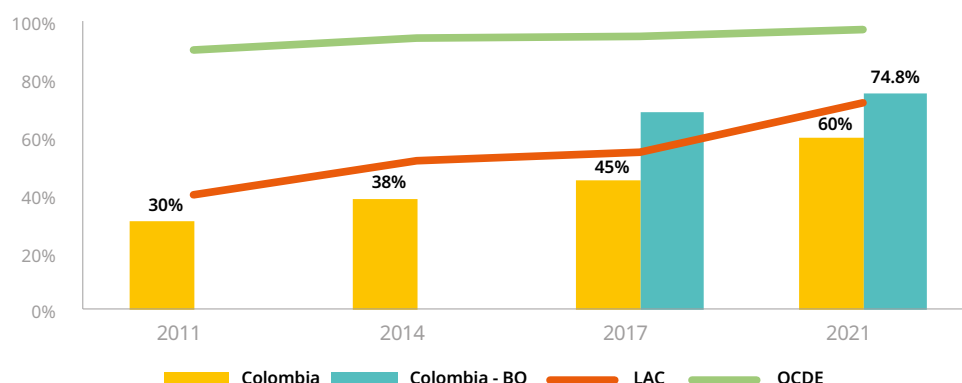
Por otro lado, una baja productividad también puede dificultar el acceso al crédito, dado que las instituciones financieras evalúan el desempeño y la capacidad de pago de las empresas antes de otorgar préstamos. Si una empresa muestra baja productividad, es posible que su rentabilidad y solvencia sean percibidas como bajas, lo que puede restringir su acceso al crédito.

Una investigación realizada por la Universidad de Stanford en colaboración con el Banco Mundial encuentra evidencias de que la falta de acceso al crédito es una de las principales barreras para la productividad de las pymes (Bloom et al., 2010). Asimismo, Esther Duflo y Abhijit Banerjee han demostrado en diversas ocasiones y de forma rigurosa el efecto nocivo del bajo acceso al crédito en las pymes y grupos vulnerables, así como su relación con mantener “la trampa de la pobreza”. Por otro lado, Giang et al. (2019) explican que las empresas que tienen acceso a préstamos bancarios pueden observar mejoras en su productividad, medida a través de la PTF, de entre 8.6 y 9 %.

Figura 2.6.1

Cuenta actual en institución financiera

Porcentaje de edad 15+ o adulta



Fuente: Banco Mundial, Global Findex Database.

Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades

En Colombia, la inclusión en el sector financiero formal ha ido aumentando en la última década. De acuerdo con la encuesta trienal del Banco Mundial, el incremento es del orden del 30 % en 2011 al 60 % en 2021 en cuanto a personas mayores de 15 años que reportan poseer una cuenta en una institución financiera formal. Por su parte, según los datos compilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Banca de las Oportunidades (BO), a 2021 el 74.8 % de los colombianos adultos poseía algún producto financiero activo mientras que el 90.5 % había tenido acceso a algún producto.¹¹

En cuanto al uso y actividad de los servicios financieros, un indicador es el número de solicitantes de préstamos a bancos. En el año 2021, 256.2 de cada 1000 adultos eran solicitantes de préstamos en Colombia, más que los 102.7 por cada 1000 adultos reportados en 2004. El aumento del número de solicitantes ha sido constante y se ha mantenido cercano al promedio de Latinoamérica y el Caribe para el periodo reportado. Se estima que cerca de un 35 % de adultos contaba con algún crédito activo en 2022 (SFC y BO, 2022).

El uso de instrumentos financieros por parte de las pymes —importantes motores de la economía— permite entender su acceso a capital para desarrollar sus operaciones. En Colombia, la tendencia ha sido al alza: los préstamos activos a pymes han pasado de representar el 0.3 % del PIB en 2004 al 1.2 % en 2021, aunque inferior al promedio de Latinoamérica y el Caribe en los años analizados. Si bien según la

11 Las diferencias a nivel de acceso entre las fuentes pueden ocurrir debido a las diferentes metodologías usadas. El Global Findex Database utiliza una muestra representativa de 1000 personas (edad 15+) a quienes se les pregunta si actualmente poseen una cuenta. Los datos de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Banca de las Oportunidades se basan en datos del DANE y la compañía de datos crediticios TransUnion, por medio de la división del número de adultos y algún producto financiero entre la población total.

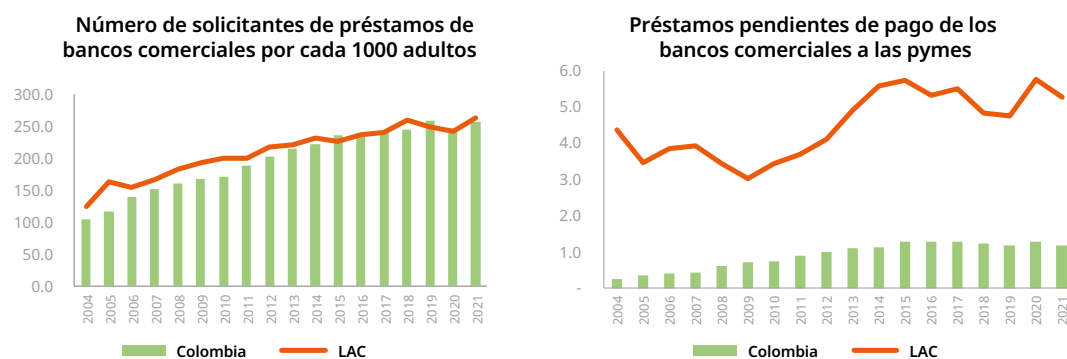
SFC y la BO en 2022 el 73.3 % de las empresas registradas tenía acceso a productos financieros, a nivel de acceso al crédito la cifra promedio es 27.3 %: 15.8 % las microempresas, 63.6 % las pequeñas empresas y 84.7 % las grandes empresas (SFC y BO, 2022). En general, se evidencia que el acceso a capital en forma de préstamos ha mejorado para las pymes formales colombianas, con retrocesos durante la pandemia. En cuanto a las microempresas formales, el acceso al crédito se mantiene bajo.

En general, la Banca Nacional de Desarrollo ha realizado esfuerzos y desplegado políticas públicas para la inclusión financiera. Dos de sus cuatro bancos, el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancoldex) y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) son activos en el tema: la Banca de las Oportunidades, administrada por el Bancoldex, es un programa que busca la inclusión financiera de las familias en pobreza, mipymes y emprendedores; y Finagro, por su parte, facilita créditos a productores agropecuarios.

El nivel de acceso al crédito de las pymes formales evidencia la incidencia de estas iniciativas. No obstante, a 2018 las empresas informales representaban el 60 % de las firmas, y la informalidad laboral alcanzaba el 85.3 % de las microempresas (Férrandez, 2020; DANE). Las empresas en informalidad tienden a experimentar aun mayores trabas y menor acceso al crédito que sus contrapartes formales.

Figuras 2.6.2 y 2.6.3

Solicitantes de préstamos y Préstamos activos por pyme



Fuente: FMI, encuesta de acceso financiero

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) recolecta información extensa sobre el acceso a financiamiento de las mipymes. Así, en 2021 realizó una encuesta a 5961 empresarios cuyos hallazgos ilustran el estado del acceso de las firmas informales en Colombia: en promedio, un 27.3 % de las mipymes afirma haber solicitado créditos al sector financiero formal durante el primer semestre de 2021, proporción que se mantiene similar entre micro, pequeñas y medianas empresas. En el sector Industrial, las solicitudes de estas tres categorías presentaron una aprobación promedio de 70.7 %. En el sector Servicios, la aprobación de las microempresas fue de 61 %, 26 puntos porcentuales menor que el 87 % de aprobación de las medianas y 13 puntos porcentuales menor que el 74 % de las pequeñas. En el sector Comercio, la aprobación de las micro y pequeñas empresas fue de 53 a 55 %, el más bajo; y para las medianas, de un 68 %. La encuesta resalta que, aunque los pedidos de colateral y garantía son moderados (de 2 a 20 %), afectan mayormente a las micro y pequeñas empresas: al 15 a 30 % de estas empresas les fue requerido un colateral mayor al 40 % del valor del crédito, mientras que al 100 % de las empresas medianas se les requirió entre 1 y 20 %.

Por otro lado, entre el 26 y el 42 % de las mipymes usa recursos propios para satisfacer sus requerimientos de financiación. De igual forma, en el programa Innovación Más País de la ANDI se encuentra que el 51.1 % de las empresas participantes financian la innovación con recursos propios (ANDI, 2022).

Según la encuesta de la ANIF, las razones para no solicitar créditos son el exceso de trámites (24 %), los altos costos financieros (15 %) y los largos procesos de solicitud y aprobación (11.3 %). La razón principal es la no necesidad del crédito (ANIF, 2021). Estos datos demuestran que, aunque existen avances en el acceso y uso de los servicios financieros, las micro y pequeñas empresas se tropiezan con obstáculos, en especial si se encuentran en la informalidad.

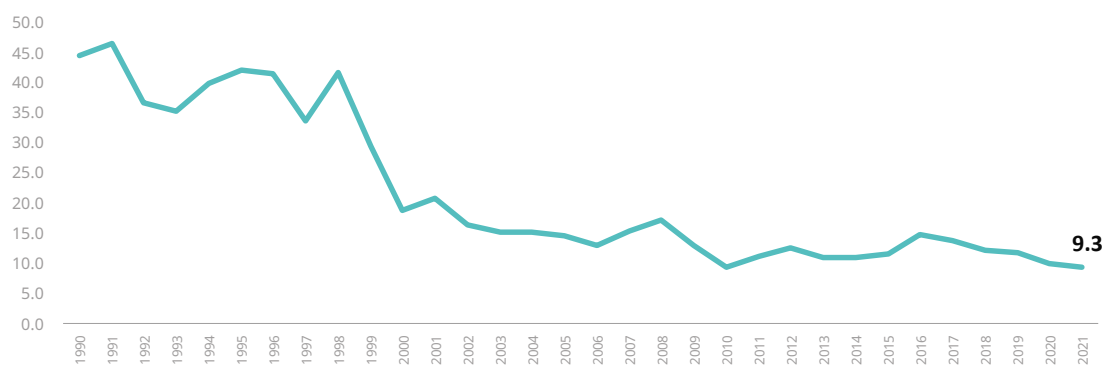
Un componente esencial para fomentar el acceso y uso de los instrumentos financieros (como los préstamos) es su costo: se estima que las pequeñas empresas deben pagar hasta 20 veces más que las grandes para obtener financiamiento (McKinsey, 2015). Se ha demostrado que la tasa de interés es un factor que incide en la productividad de los países y puede afectar el acceso y distribución de los recursos (Cette et al., 2016). Además, Lopez-Salido et al. (2021) explican cómo influye en la productividad a través de la innovación, ya que bajas tasas de interés brindan a los tecnológicamente rezagados la oportunidad de innovar, lo que, a su vez, conduce a una mayor productividad, competencia y crecimiento del mercado. Por otro lado, un estudio de dieciséis economías avanzadas y quince economías emergentes, incluyendo países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, demuestra que las tasas de interés reales más altas conducen a contracciones en las economías emergentes, mientras que impulsan la productividad —medida a través de la PTF— de las economías avanzadas (Monacelli y Siena, 2023).

La tasa de interés activa refleja la tasa promedio que los bancos cobran a sus clientes por los préstamos, que en el país ha ido disminuyendo en parte debido a la estabilidad de los precios y luego por la crisis financiera colombiana de 1999: al año 2002, la tasa activa era de 16.3 % y a 2021, de 9.3 %. El mayor ajuste se da entre los años 2008 y 2010 (periodo de la Gran Recesión), cuando pasa de 17.2 a 9.4 %. Si bien las tasas de interés han ido subiendo, se espera que vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia (FMI, 2023). El Banco de la República ha evidenciado la prioridad de esta meta al aumentar su tasa de interés a las entidades financieras a 13 %, en un esfuerzo por contrarrestar la inflación (El País, marzo 2023), lo que entraña un riesgo para el acceso al crédito. Según una encuesta, la ANIF ha encontrado que el 73.5 % de las mipymes considera que la tasa de interés de su crédito es apropiada (ANIF, 2021). La respuesta no varía significativamente por tamaño.

Figura 2.6.4

Tasa de interés activa

Porcentaje

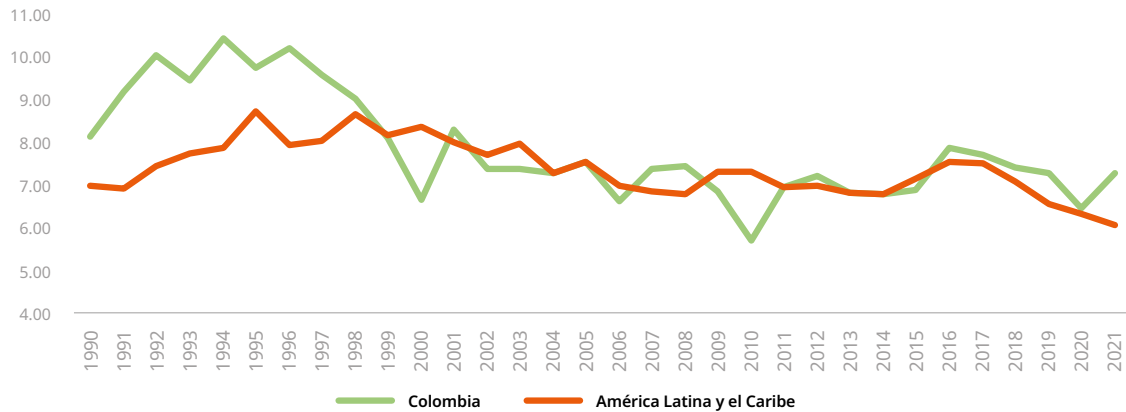


Fuente: Banco Mundial

En cuanto a la diferencia entre las tasas activa y pasiva, desde el año 2001 Colombia ha seguido muy de cerca al promedio de Latinoamérica y el Caribe. Si se tiene en cuenta que la tasa pasiva es la tasa de interés que pagan los bancos a los clientes por sus depósitos, el diferencial de las dos tasas permite ver cuán atractivo es prestar para los bancos: si prestar dinero no les es rentable, entonces prestarán menos, lo que afectará el acceso al crédito.

Figura 2.6.5

Diferencial entre tasas de interés activa y pasiva Porcentaje



Fuente: Banco Mundial

2.7. Infraestructura física y digital, y conectividad con mercados internacionales

Una economía no puede funcionar sin infraestructura: para comercializar sus productos, las empresas requieren transporte, puertos y aeropuertos, y suministro eléctrico adecuados. La cantidad y calidad de la infraestructura de un país desempeñan un rol importante, y se ha demostrado que las existencias de capital físico contribuyen a elevar la productividad (Duggal et al., 1999; Bhatta y Drennan, 2003). Sin embargo, la magnitud de la relación entre infraestructura y productividad puede variar en función del contexto del país, el tipo de infraestructura y su nivel de calidad, y la forma es que se mide la relación (Deng, 2013).

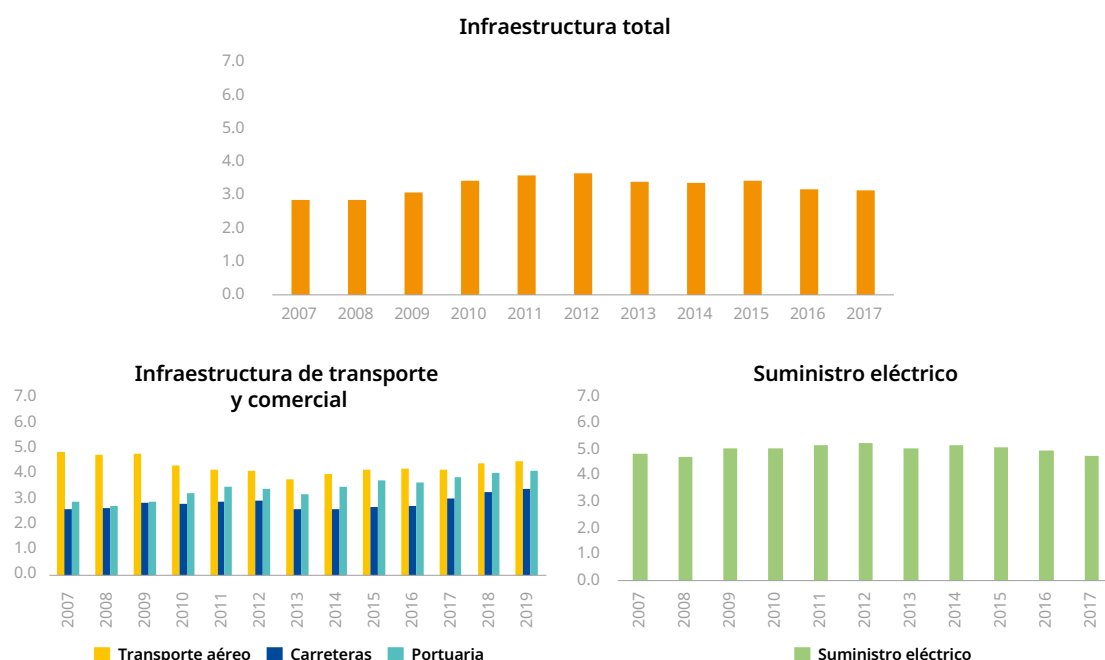
De acuerdo con los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina presenta una brecha importante en materia de infraestructura. Para reducirla y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030, la región tendrá que incrementar su inversión en este rubro en un 70 % hasta que alcance el 3.12 % anual del PIB (Brichetti et al., 2021). En esta sección se aborda el tema de la calidad de la infraestructura como mecanismo para elevar la productividad.

A lo largo del tiempo, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha monitoreado la percepción de la calidad y eficiencia de la infraestructura por su importancia en la competitividad y productividad de las economías (WEF, 2019). La percepción de la calidad de la infraestructura total (transporte y servicios) en Colombia se ha mantenido en promedio en 3.3/7, lo que sitúa al país en una calidad moderada baja. En el *ranking* más reciente del WEF (2019)¹², Colombia ocupó el puesto 81 de 141 países.

¹² Para su edición de 2018, el Foro Económico Mundial cambió la metodología de su índice de competitividad global (ICG), lo que no hace comparables algunas series y es la razón por la que se presenta el *ranking* a 2019, último año publicado al momento de la elaboración de este estudio. Para 2018 y 2019 se pregunta sobre la eficiencia de los servicios aéreos y portuarios más que por la calidad de la infraestructura; sin embargo, se consideró pertinente agregarlo a las series presentadas por su similitud.

Figura 2.7.1

Percepción de la calidad de la infraestructura y suministro eléctrico 1-7 (mejor)



Fuente: Foro Económico Mundial, índice de competitividad global.

A nivel de infraestructura de transporte, en 2019 Colombia se ubicó en la posición 92 de 141 países. Se observa que específicamente en transporte aéreo existe una mejor percepción promedio (4.3/7) de la calidad y eficiencia de los servicios e infraestructura, con la mejor valorización alcanzada durante 2007 y 2009 (4.8/7) y la peor en 2013 (3.8/7). A 2019 se presenta una recuperación, con una evaluación de los servicios de transporte aéreo de 4.5/7. Si bien el país cuenta con un mercado aéreo desarrollado, a 2023 ciertas aerolíneas atravesaban procesos de bancarrota (El Tiempo, marzo de 2023).

En cuanto a la percepción de la calidad de las carreteras, su puntaje es el menor de las series evaluadas, con un promedio de 2.8/7, si bien presenta mejoras a 2019 con un puntaje de 3.4/7. El transporte por carretera significa un reto debido a los largos tiempos que conlleva (ANDI, 2023): Brichetti et al. (2021) estiman que la infraestructura en carreteras a nivel rural requiere un 60 % en mantenimiento y reemplazos sobre la inversión total. Asimismo, es precisa la mejora del transporte urbano masivo para alcanzar la cobertura con la que cuentan las ciudades referentes de la región.

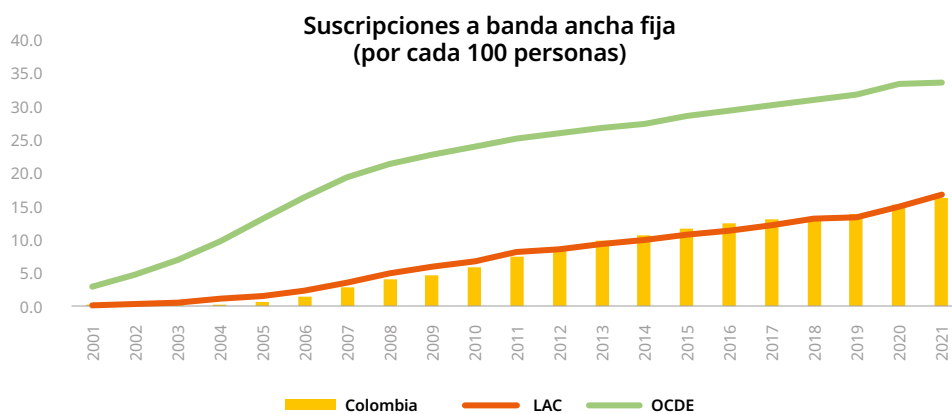
Por su parte, la percepción de la infraestructura portuaria ha experimentado una mejoría a través de los años, con un puntaje de 4.1/7 en 2019. En cuanto a los servicios de electricidad y agua, en 2019 Colombia ocupó el lugar 72 de 141 países. Entre 2007 y 2017, la percepción de la calidad del suministro eléctrico alcanzó una valorización de 5/7: al año 2017, el 97 % de la población tenía acceso a electricidad. Es necesario que el sector público y las empresas aúnen esfuerzos para diversificar la matriz energética y facilitar la adopción de energías renovables que contribuyan a la sostenibilidad energética del país. Estas transiciones deben ser justas y aminorar sus efectos en los trabajadores y poblaciones que dependen de estas industrias, de alta relevancia en Colombia. Vale aclarar que el consumo energético que proviene de fuentes renovables se estima en 23.6 % (WEF GCI 2019).

En cuanto a la infraestructura digital, un acceso inadecuado limita el crecimiento y la productividad empresarial. Según un reporte elaborado por la compañía McKinsey, en los países en desarrollo que invierten en infraestructura digital las empresas suelen tener mayores ingresos que aquellas en contextos de baja inversión en este rubro (McKinsey, 2015). Particularmente, para las pymes usar y tener acceso a infraestructura digital brinda numerosos beneficios, tales como aumento de ventas, reducción de costos, optimización de procesos y mayor innovación (OIT, 2021; OIT, 2022c).

A 2020, cerca del 69.8 % de la población adulta de Colombia era usuaria de internet, proporción que, aunque alta, es menor que el 73.9 % en promedio de Latinoamérica y el Caribe (International Telecommunication Union, ITU).

Figura 2.7.2

Conectividad y calidad



Fuente: ITU

La infraestructura digital de un país depende de la calidad de las conexiones, para lo cual es preciso observar las suscripciones a banda ancha, que permiten mayor velocidad e intercambio de información que los datos móviles. En el caso de Colombia, las suscripciones a banda ancha han ido aumentando en las últimas décadas hasta alcanzar 16.4 por cada 100 personas en 2021, muy cerca del promedio de la región (16.8) pero por debajo de la OCDE (33.6). Este indicador incluye las suscripciones de las organizaciones y empresas, lo que puede dar luces sobre la penetración digital para usos comerciales.

A nivel del aprovechamiento de la infraestructura digital, el índice de brecha digital elaborado por el MinTIC estima, a 2021, una de 0.41/1 (mientras más cercana a 0, menor es la brecha existente). Entre los componentes de la brecha, el acceso a estas tecnologías (conexión, *hardware*, calidad, punto de acceso) se encontraba en 0.49 a 2021, una mejora con respecto al 0.61 de 2018. Por su parte, el componente de aprovechamiento (frecuencia, intensidad y propósito del uso) se colocó en 0.47 en el año 2021, levemente menor que en 2018 (MinTIC, 2021). En general, las brechas digitales entre la capital y otras zonas del país son más marcadas tanto en infraestructura como en aprovechamiento. A su vez, la crisis sanitaria parece haber tenido un efecto positivo en la brecha digital en Colombia (ANDI, 2023).

Es de vital importancia para un país productivo poder llevar los productos y servicios creados por sus industrias y ciudadanos hacia otros mercados. En 2015, McKinsey estimó que las reformas y los acuerdos comerciales realizados entre 2004 y 2014 aumentaron la productividad en 2.8 % por año en las economías en desarrollo¹³ (McKinsey, 2015). La apertura a mercados internacionales favorece la productividad de

¹³ Medida como PIB por persona empleada y excluyente de China.

los países a través de la innovación y la diversificación del riesgo: cuando una firma ingresa al mercado de exportación, registra incrementos de productividad derivados de las transferencias tecnológicas y economías de escala propias del proceso (Schwarzer, 2017). Por otro lado, la diversificación propicia una mejor distribución de los riesgos de inversión, lo que estimula la acumulación de capital y el crecimiento económico (Acemoglu y Zilibotti, 1997). Con respecto a este tema, Crespi y Zuniga (2012) han demostrado que en seis países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay) la exportación ha promovido procesos innovadores que han redundado en una mayor productividad.

Existen diversos indicadores que permiten medir el nivel de exportación y diversificación de un país; por ejemplo, el índice de penetración de las exportaciones del Banco Mundial determina si los productos de un país están llegando a los mercados y a los importadores de tales productos. Un índice de valor bajo significa que existen barreras para que las empresas puedan expandirse a nuevos mercados. En Colombia puede apreciarse una mejora en este aspecto, al haberse pasado de 2.8 en 1991 a 6 en 2020, un índice mayor al de otros países de la región (Argentina con 5.8, Chile con 4.9 y Uruguay con 2.8), pero por debajo de Brasil (13.2) y México (13.9), y muy lejano de un nivel como el de Estados Unidos (42.7).

Así como la penetración a nuevos mercados es esencial, se debe abogar también por la diversificación. El índice de concentración de mercado Herfindahl Hirschman (HHI) ilustra sobre el nivel de dependencia de un país de sus socios de exportación. Un índice cercano a 1 significa que existe una alta concentración de las exportaciones; es decir, que se comercializa con pocos mercados. En el caso de Colombia, hubo periodos de mayor concentración durante principios y finales de la década del noventa. Sin embargo, de 2001 a 2020 el índice promedio es de 0.16, lo que demuestra una diversificación del comercio internacional. La tendencia apunta a una diversificación cíclica, que desde 2001 ha oscilado entre 0.12 y 0.21. Los principales socios de exportación de Colombia han sido Estados Unidos, China y Ecuador (Atlas de Complejidad Económica).

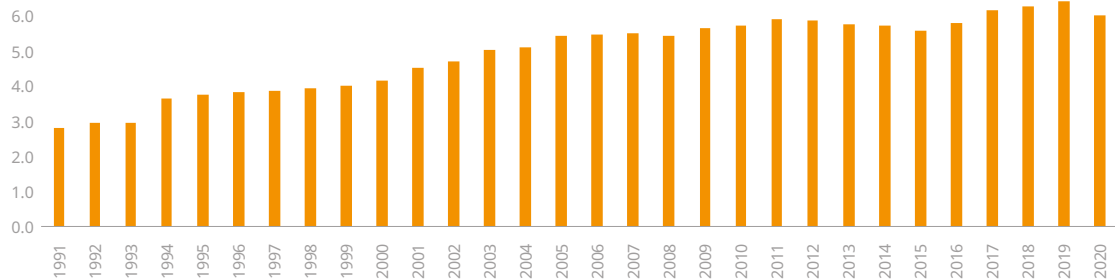
El tipo de producto exportado también incide en el crecimiento y la productividad: los países que exportan productos más complejos crecen de forma más rápida (Hausmann et al., 2013). El [Atlas de Complejidad Económica](#) del Growth Lab concluye que, para 2020, la complejidad de los principales productos exportados por Colombia era baja, y se concentraban principalmente en agricultura (café, flores, bananas) y minerales (petróleo, carbón, oro). Las exportaciones de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) representaron un 7.8 % y fueron evaluadas como de complejidad moderada para el contexto país.

Para el año 2020, el Atlas indica que, a pesar de que se ha verificado una mayor diversificación, la complejidad ha disminuido. Por su parte, si bien se evidencia un rango de productos categorizados como de alta complejidad, sus valores a nivel de exportación son bajos. Las organizaciones empresariales consultadas resaltan que se ha alcanzado cierto progreso en términos de diversificación de destinos, en parte debido a que Colombia se ha mantenido abierta a tratados de libre comercio. A su vez, se reconoce la dependencia de las exportaciones tradicionales como la del petróleo y su rol en la diversificación de los destinos, pero también se destaca el dinamismo de las exportaciones del sector Industrial (ANDI, 2023).

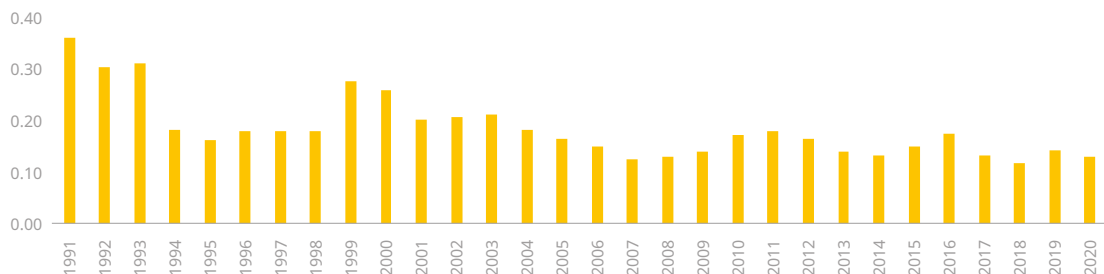
Figuras 2.7.3 y 2.7.4

Penetración y Concentración de las exportaciones

Índice de penetración de las exportaciones



Índice de concentración de mercado HHI



Fuente: Banco Mundial

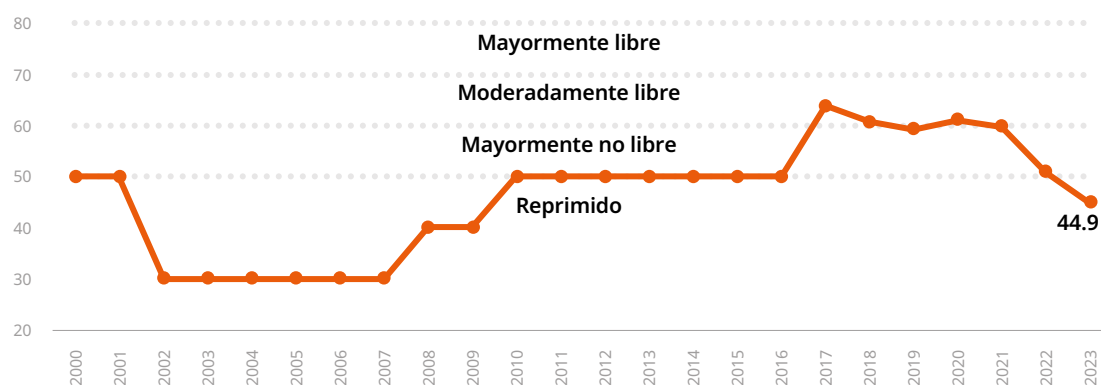
2.8. Derecho de propiedad y Estado de derecho

Para las empresas, el derecho de propiedad —que abarca tanto la propiedad física como la intelectual— es fundamental para avanzar en sus negocios y buscar la productividad. Un análisis de 20 estudios de distintos países de ingresos bajos y medio-bajos de América Latina, el sur y el este de Asia, y África demuestra cómo el reconocimiento de los derechos de propiedad y la tenencia de tierras agrícolas fomentan la productividad y aumentan los ingresos (Lawry et al., 2014). En cuanto al resguardo de la propiedad intelectual y patentes, un estudio de 95 países durante el periodo 2001-2018 examina el rol de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la productividad total de los factores (PTF). Los autores hallaron una relación en forma de U invertida en los países en desarrollo y desarrollados, lo que sugiere un nivel óptimo de protección que tiende a promover la productividad (Su et al., 2022).

La fundación Heritage calcula un reconocido índice de libertad económica que incluye un componente de derecho de propiedad¹⁴ que, en el caso de Colombia, se percibió dentro del nivel “reprimido” durante la primera década del nuevo milenio, con un puntaje por debajo de 50/100. Si bien a partir de 2010 se evidencia una mejora, aún se considera al país como “mayormente no libre” entre ese año y 2016. En 2017 se presenta una gran mejora, al alcanzarse el nivel “moderadamente libre”, que se mantiene hasta 2021,

¹⁴ El derecho de propiedad se mide evaluando el riesgo de expropiación, el respeto a los derechos de propiedad intelectual, y la aplicación de contratos y leyes de derechos de propiedad. El índice usa diversas fuentes. Para más información, <https://www.heritage.org/index/about>.

cuando recae hasta llegar nuevamente al nivel de reprimido, con un puntaje de 44.9 para 2023. Cabe destacar que el cambio de Gobierno en 2022 fue histórico para el país, que por primera vez se inclinaba hacia una ideología de izquierda. En el presente, la percepción general y la percepción sobre el derecho de propiedad en particular se muestran más influenciadas por la preocupación por posibles cambios en las políticas públicas que por acciones en curso. Las acciones actuales del Gobierno que repercuten en la propiedad están más enfocadas en comprar tierras libremente y redistribuirlas que en apropiar o nacionalizar (El Colombiano, octubre de 2022).

Figura 2.8.1**Puntaje del componente de derecho de propiedad**

Fuente: Datos y clasificaciones de la Heritage Foundation, índice de libertad económica, componente de derecho de propiedad.

Por su parte, el Estado de derecho (el marco de leyes e instituciones) es primordial para asegurar que se respeten derechos como el de propiedad y otros asignados tanto a las personas como a las empresas. Un Estado de derecho eficiente y de buena calidad beneficia el crecimiento de las pequeñas empresas (Islam, 2003), fomenta la innovación y la inversión extranjera, y aumenta la recaudación fiscal (Esposito, 2014). Otros autores, a partir de una muestra de 120 países, hallan una relación estadísticamente significativa entre Estado de derecho —en variables como esperanza de vida y participación en la inversión— y crecimiento económico medido por PIB per cápita y productividad laboral (Guillemette et al., 2017).

El Banco Mundial, a través de sus indicadores de gobernanza mundial (WGI, por sus siglas en inglés) mide seis dimensiones de gobernanza¹⁵, dos de las cuales, calidad regulatoria y Estado de derecho, han sido incluidas para entender el panorama colombiano. El indicador de calidad regulatoria abarca las percepciones relacionadas con las habilidades de los gobiernos para formular e implementar políticas públicas y regulaciones funcionales que promuevan el desarrollo del sector privado. Por su parte, el indicador de Estado de derecho comprende la percepción de hasta qué punto se respetan las reglas de la sociedad, la calidad de la policía, las cortes y la aplicación de los contratos¹⁶. Mientras un indicador captura la funcionalidad de las políticas públicas, el otro da una mirada a la calidad de la aplicación de leyes y reglas¹⁷.

Al respecto, el nivel de calidad regulatoria de Colombia se ha mantenido en promedio en el *ranking* percentil de 59.7, con un percentil máximo de 66.8, un mínimo de 51.7 y una tendencia positiva. A 2021

¹⁵ Para más información, ver <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

¹⁶ Para la definición detallada y las fuentes de los indicadores, puede consultar <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

¹⁷ Opiniones e interpretación expresadas por los autores de este informe.

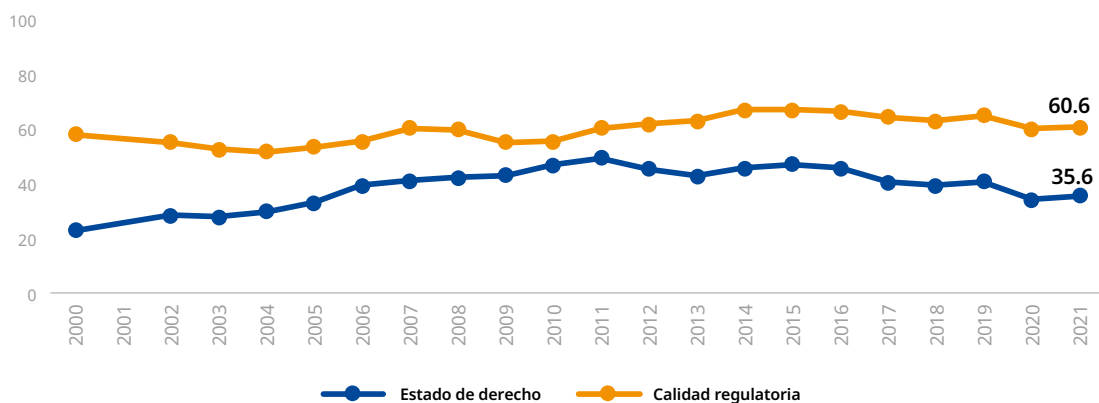
se situaba en el percentil 60.6, mientras que el agregado de países de la OCDE ocupaba el percentil 87.5 y Latinoamérica y el Caribe, el 52.6 (WGI)¹⁸. Sin embargo, dado el cambio de ideología en el Gobierno, es de esperar un efecto negativo en las percepción de este indicador. Hay que tener en cuenta que los indicadores de percepción deben usarse con fines ilustrativos y no para concluir realidades absolutas. Las organizaciones empresariales consultadas refieren que hoy por hoy no existen mensajes claros sobre las políticas públicas o sus cambios, lo que genera incertidumbre (ANDI, 2023).

En cuanto al Estado de derecho, el promedio percentil de las últimas dos décadas para Colombia es de 39.1, con una tendencia ligeramente a la baja a partir de 2011. A 2021, el *ranking* percentil ocupado era de 35.6. Para el agregado de países de la OCDE, en 2021 el percentil era 87.1 y para la región, 49 (WGI). En Colombia, la existencia de un gran número de leyes (y más que están siendo estudiadas en el Congreso) representa un reto en cuanto a su correcta implementación, así como incertidumbre jurídica. Los tiempos que toman los trámites y la resolución de juicios también son considerados altos. Además, los niveles de informalidad llevan a que las personas y las empresas consideren que el Estado de derecho no se aplica por igual a todos (ANDI, 2023).

Figura 2.8.2

Percepción del Estado de derecho y de la calidad regulatoria

Ranking percentil de 0-100 (mejor)¹⁹



Fuente: Banco Mundial, WGI.

2.9. Gobernanza y política anticorrupción

La relación negativa entre prácticas de mala gobernanza como la corrupción, por un lado, y la productividad de un país, por el otro, ha quedado evidenciada. La corrupción afecta la productividad de los países porque dificulta la eficiente ubicación de los recursos. Los gobiernos corruptos toman decisiones sobre la base de la búsqueda de beneficios personales, y no es posible maximizar el bienestar

¹⁸ Aunque los promedios de la OCDE y Latinoamérica y el Caribe son obtenidos del portal de WGI, al no publicarse los intervalos de confianza para estos agregados no se puede hacer una comparación absoluta entre las series, como aconseja la metodología. La comparación sirve solo de ilustración. Metodología WGI: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

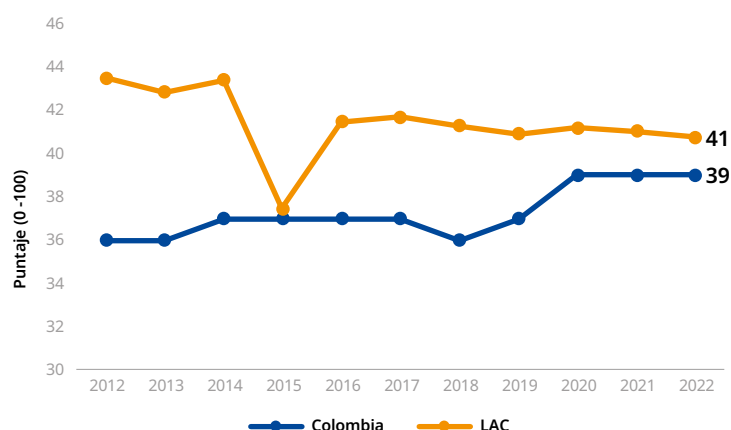
¹⁹ Se presenta el rango percentil promedio. Este *ranking* es actualizado por los autores cada año, por lo que permite ver una evolución de los países en el tiempo. El propio WGI recomienda enfocarse en los cambios en tendencias (mayormente en una década) más que en año por año.

social mientras se otorgue la provisión de bienes y servicios públicos a contratistas con conexiones o dispuestos a ofrecer sobornos antes que a aquellos que ofrecen la mejor calidad (Rose-Ackerman y Palifka, 2016). En efecto, de acuerdo con un estimado del Foro Económico Mundial (FEM), la corrupción aumenta los costos del sector privado para hacer negocios en cerca de un 10 % (OCDE, 2014).

Figura 2.9.1

Índice de percepción de la corrupción

0-100 (menos corrupción)



Fuente: Transparencia Internacional

En el caso de Colombia, en 2022 el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional la posicionó en el puesto 91 de 180 países, con un puntaje de 39/100. Se han presentado mejoras en el puntaje desde el año 2012²⁰, cuando Colombia obtuvo un peor puntaje (36/100) y ocupó el puesto 94 de 176 países. Sin embargo, el país se percibe con mayor corrupción que el promedio de Latinoamérica y el Caribe, así como alejado del promedio de los miembros de la OCDE, cuyo puntaje es de 66/100 para 2022.

A través de los años, los países de Latinoamérica han librado una lucha constante contra la corrupción, y la región es percibida como una con altos niveles promedio en este rubro (Rotberg, 2018). Como parte de sus indicadores de gobernanza, el Banco Mundial mide la percepción del control de la corrupción: hasta qué punto se percibe que el poder público es usado para beneficio privado, sea a pequeña o gran escala. Así, en las últimas dos décadas Colombia ha mantenido un promedio en el *ranking* percentil de 46.25, con un máximo de 52.2 y un mínimo de 40.3. En general, la tendencia ha sido a la baja desde el máximo alcanzado en 2004, con cierta recuperación sostenida a partir de 2016 que indica el comienzo de una tendencia a la baja a partir de 2021²¹, año en que el agregado de países de la OCDE ocupaba el percentil 84.4 y Latinoamérica y el Caribe, 52.8 (WGI)²². El indicador se alimenta de varias fuentes, algunas de las cuales califican a Colombia en un percentil menor o mayor, lo que explica los límites superiores e inferiores. Para 2021, la diferencia entre el estimado promedio y el límite inferior es de aproximadamente 14 puntos, mientras que con el límite superior es de 7. Grandes diferencias pueden ser una señal de

20 Aunque el índice existe desde el 2002, los cambios en la metodología a partir de 2012 no permiten comparar con las series anteriores.

21 Este *ranking* es actualizado por los autores cada año, por lo que permite ver la evolución de los países en el tiempo. El propio WGI recomienda enfocarse en los cambios en tendencias (mayormente una década) más que en año por año.

22 Aunque los promedios de la OCDE y de Latinoamérica y el Caribe son obtenidos del portal de WGI, al no publicarse los intervalos de confianza para estos agregados no se puede hacer una comparación absoluta entre las series como aconseja la metodología. La comparación sirve solo de ilustración. Metodología WGI: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.

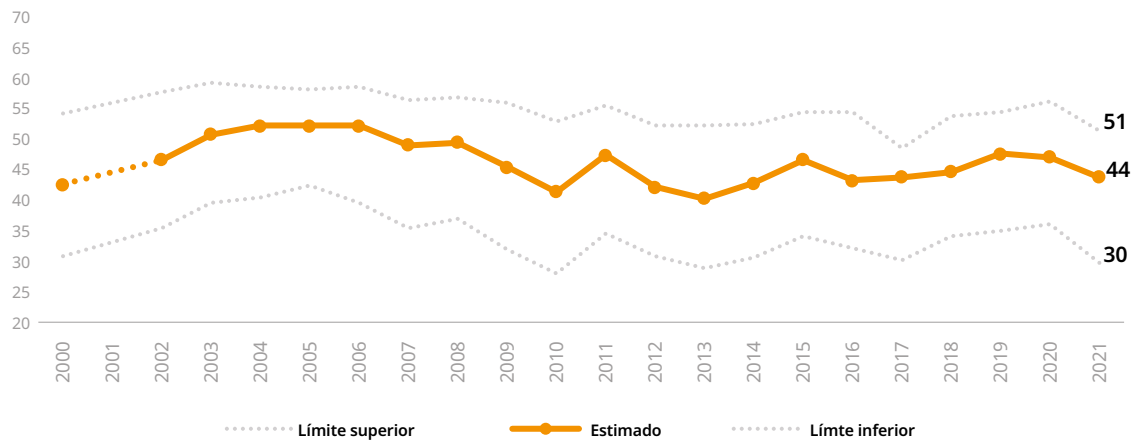
disparidad en la percepción sobre el control de la corrupción dadas las diversas fuentes y sectores con los que se construye el indicador.

Un fenómeno nuevo en torno a la corrupción en general y su percepción es la mayor facilidad de exponerla, razón por la cual es difícil comprobar si la lucha ha mejorado o, en todo caso, ahora se visualiza más. De todos modos, esta mayor visualización es necesaria para su combate (ANDI, 2023). Por su parte, la ciudadanía cada vez está desempeñando un papel más preponderante, lo que se evidencia con el aumento de las veedurías ciudadanas en Colombia (ANDI, 2023).

Figura 2.9.2

Percepción del control de la corrupción

Ranking percentil de 0-100 (mejor)



Fuente: Banco Mundial, WGI.

Capítulo 3

Impulsando la productividad en Colombia

El análisis realizado en este informe evidencia que, en Colombia, la PTF no ha avanzado de forma satisfactoria, al posicionarse con un crecimiento cercano al 0.16 según el DANE y 0.05 según The Conference Board para el periodo comprendido entre 2005 y 2020. Si bien el país ha mostrado un mejor desempeño promedio que la región, este ha sido clasificado como de baja productividad (BID, 2014). A partir de 2019, el crecimiento de la productividad fue positivo y se mantuvo durante la pandemia; sin embargo, a 2022 se observa una desaceleración que sugiere que tal crecimiento fue más bien transitorio, y que se debió en parte a los ajustes laborales y estructurales determinados por la crisis sanitaria.

El capital se posiciona recientemente como el factor de mayor contribución, aunque durante la pandemia el trabajo fue el más importante, tanto en la caída como en la recuperación de la economía. La productividad laboral por trabajador y por hora reflejan rezagos históricos frente a la región e incluso más frente a bloques como la OCDE y países como Estados Unidos.

Sobre la base del análisis de las nueve dimensiones que fomentan un ambiente propicio para la productividad, se resaltan las principales áreas de oportunidad en torno a las cuales se presentan recomendaciones que, aunque contextualizadas, no son exhaustivas. Bajo un contexto de cambio histórico de la ideología de gobierno, estas acciones podrán hacerse efectivas con el apoyo de las organizaciones empresariales y un diálogo social sostenido en el diseño de políticas públicas.

1. Fomentar el desarrollo y la exportación de productos más complejos. Haussman et al. (2013) y el Harvard Growth Lab concluyen que los países con exportaciones de productos más complejos de lo esperado dado su nivel de ingresos crecen de forma más rápida. En la última década, Colombia ha mostrado un crecimiento promedio desacelerado y por debajo del promedio de la región, con un repunte transitorio a raíz de la recuperación posterior a la Covid-19. Es necesario aunar esfuerzos para fomentar el crecimiento económico y productivo del país, y, en tal sentido, una acción prometedora es el aumento de las exportaciones de productos considerados de mayor complejidad. Si bien en el país existe un mercado de productos y servicios más complejos que las exportaciones predominantes de minerales y productos agrícolas, la mayoría no supera el 1 % del valor de las exportaciones ([Altas de Complejidad Económica](#)).

En cuanto a los productos de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), a 2020 estos alcanzaban el 7.8 % del total de las exportaciones y representaban uno de los principales propulsores de su crecimiento. Si bien tales productos se incrementaron un 4.6 % en promedio entre 2015 y 2020, su complejidad relativa era moderada (Atlas, 2020). La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su programa Innovación Más País, recolecta información y apoya a las empresas innovadoras de Colombia. Para sus mediciones, en 2022 contaba con 347 empresas que empleaban directamente a cerca de 380 mil trabajadores cuyos ingresos representaban el 24 % del PIB del país (ANDI, 2022). En promedio, estas empresas innovadoras lanzaron en 2021 diez productos y servicios de los cuales el 31 % estaba destinado al mercado internacional. Colombia ha aumentado la

penetración de sus productos de forma constante, y cada vez alcanza más destinos. Al mismo tiempo, el sector Industrial está enfocado en dinamizar sus exportaciones (ANDI, 2023).

Se debe aprovechar esta coyuntura para consensuar una estrategia que fomente la exportación de productos más complejos —con trayectoria de crecimiento como la de los productos TIC— que disminuyan la dependencia de hidrocarburos y minerales. El Centro de Comercio Internacional (ITC) destaca que las asociaciones que promueven el comercio deben enfocarse en apoyar a las pymes para que aprovechen el *big data* y lo conviertan en información útil para sus decisiones comerciales (ITC, 2018). También podrían representarlas en lo relativo a las exportaciones cuando negocien con proveedores de plataformas y entes regulatorios. Las organizaciones empresariales están posicionadas para impulsar estas acciones por sí mismas y desde el sector privado para lograr ampliar la oferta productiva y exportable del país.

- 2. Cerrar las brechas de habilidades entre los graduados y las necesidades de las empresas.** De los diferentes indicadores y datos obtenidos se observa que existe una brecha entre las necesidades de las empresas y las habilidades de los graduados. Aunque la calidad educativa se ha mantenido o mejorado en algunas pruebas (PISA, 2018), la brecha de habilidades está presente. De acuerdo con el *Informe sobre el futuro del empleo 2023* del Foro Económico Mundial, el 80 % de las compañías que operan en Colombia esperan una oferta de talento insuficientemente calificada a 2027 (WEF, 2023). En el caso de los jóvenes, se agrega el desajuste de las habilidades requeridas para su primer empleo (ANDI, 2023): si bien presentan brechas menores en habilidades transversales (cognitivas y blandas), no sucede lo mismo con las habilidades específicas del trabajo (Díaz y Salas, 2020). A 2021, el índice de brecha digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reporta una brecha de habilidades digitales de 0.56/1 a nivel nacional y de 0.29 en Bogotá. Mientras más cercana a 0, menor es la brecha existente.

Para garantizar el crecimiento del aparato productivo, es esencial que se cierren estas brechas. Las organizaciones empresariales deben encabezar el debate sobre este tema y aportar, de forma consensuada, en torno a las habilidades que requieren y cómo explotar la prevalencia de las habilidades transversales de los jóvenes al ofrecerles su primer empleo. Se estima que en Colombia menos del 30 % de las empresas toman en cuenta la obtención de un diploma para contratar (WEF, 2023), lo que invita a evaluar la desconexión entre la educación terciaria y las necesidades empresariales, y a reformular el esquema de búsqueda y desarrollo de talento.

Otra línea de acción consiste en impulsar un diálogo social que busque mejorar la eficacia y prevalencia de los fondos públicos destinados a la formación de nuevas habilidades y competencias. El *Informe sobre el futuro del empleo 2023* resalta que en Colombia los fondos públicos destinados a la formación de nuevas habilidades y competencias, así como a su mejora, son vistos como de baja prioridad e incidencia. A su vez, este Informe arroja que la principal acción para mejorar la oferta de talento dirigida a compañías de todos los tamaños es la asignación de fondos a nivel global. La disparidad existente en el país hace necesaria una reevaluación del uso e impacto de los fondos y su citada baja prioridad.

En Colombia existe una fuerte tradición de programas de pasantía y aprendizaje profesional, que constituyen otra manera de contribuir al cierre de las brechas de habilidades y fomentar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Así, el contrato de aprendizaje (Ley nro. 789 de diciembre de 2002), por ejemplo, que no entraña relación laboral y es de corta duración (6 meses), se encuentra actualmente en debate: se busca transformar estas prácticas de aprendizaje a las que se aplicarían las normas del Código Laboral. Un cambio de este tipo desincentivaría a las empresas, que preferirían afrontar multas antes que los costos y riesgos propios de la relación laboral (ANDI, 2023). Por ello, se recomienda analizar y consensuar que el objetivo de aumentar la cobertura de este programa no termine desvirtuándolo y, finalmente, disminuyéndolo.

3. Combatir la informalidad, pero entendiendo su complejidad. La informalidad en Colombia se coloca por encima de la informalidad de la región (58 % a 2022), lo que ha sido confirmado con la actualización metodológica del DANE. La brecha de la informalidad a nivel de género beneficia a las mujeres (-2 a 3 puntos porcentuales), y es marcada a nivel educativo, territorial y etario (entre 10 y 20 puntos porcentuales). La informalidad de las empresas es cercana al 60 % y de mayor prevalencia en las microempresas, con el 85.3 % de sus empleados en la informalidad (Fernández, 2020; DANE). Esta realidad lleva a una trampa de baja productividad y alta informalidad laboral que limita a estas empresas a alcanzar niveles mínimos de eficiencia para aspirar a un crecimiento productivo y ofrecer condiciones de trabajo decentes. Para combatirla, se debe apoyar a las mipymes para que alcancen un mayor acceso al crédito, se profesionalicen y digitalicen, y a su vez aplicar políticas holísticas y consensuadas.

Una forma de reducir la informalidad consiste en mejorar los niveles y condiciones de acceso al crédito para las microempresas: en tanto la cifra promedio de acceso al crédito para las empresas es de 27.3 %, para las microempresas esta solo alcanza el 15.8 %; para las pequeñas, llega al 63.6 %; y para las grandes, al 84.7 % (Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2022). Al bajo acceso de las microempresas se añade un 85.3 % de informalidad laboral. De acuerdo con una encuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en promedio un 27.3 % de las mipymes encuestadas afirma haber solicitado créditos al sector financiero formal durante el primer semestre de 2021, proporción que se mantiene similar si se desglosa en micro, pequeñas y medianas empresas. En el sector Comercio, la aprobación de las micro y pequeñas empresas fue de 53 a 55 %, la más baja. Si bien los pedidos de colateral y garantía son moderados (de 2 a 20 %), según la encuesta estos afectan principalmente a las micro y pequeñas empresas: a entre 15 y 30 % de ellas les fue requerido un colateral mayor al 40 % del valor del crédito. Siguiendo con los datos arrojados por la encuesta de la ANIF, entre las razones para no solicitar créditos el 24 % cita el exceso de trámites; un 15%, los altos costos financieros; y el 11.3 %, los largos procesos de solicitud y aprobación (ANIF, 2021).

El Gobierno y las organizaciones empresariales —entre ellas, las que agrupan organizaciones financieras— deben analizar qué acciones se requieren para que las microempresas vean incrementado su acceso al crédito y a los servicios financieros tomando en cuenta las barreras identificadas. A su vez, hay que considerar que los bancos comerciales adoptan decisiones sobre la base del riesgo, y que sus medidas para apoyar a las microempresas deben estar acompañadas por un rol activo del Estado, que debe estimular el mencionado acceso a través de su Banca Nacional de Desarrollo, en especial fortaleciendo Bancolombia y Finagro.

En cuanto a la digitalización, la pandemia ha mostrado su importancia para incrementar la resiliencia y la productividad de las empresas (OIT, 2022c; OIT, 2022f; OIT, 2020). Así, se debe fomentar que las organizaciones empresariales y el Gobierno colaboren en el diseño de programas para la mejora de la gestión empresarial de las mipymes. Una posibilidad es que las organizaciones empresariales impulsen su profesionalización y digitalización con el propósito de combatir su informalidad. El recurso regional de ACT/EMP <https://actempdigital-lac.com/ooee-digital/> muestra algunas de las iniciativas llevadas a cabo por las organizaciones empresariales de la región para fomentar la digitalización de las empresas y para apoyarlas en su formalización, comercio, planificación estratégica y acceso a tecnologías (OIT, 2022c).

Por último, se debe reconocer que la informalidad es una problemática compleja, razón por la cual las políticas que buscan reducirla deben ser el resultado de un esfuerzo conjunto y de diálogo social fundamentado en evidencias empíricas y contexto nacional, lejos de soluciones parciales que, finalmente, aumenten su costo. Los trabajos de Ulyssea (2018) en Brasil y de Fernández (2022) en Colombia resaltan esta complejidad y constituyen un punto de partida para políticas efectivas

y un mejor entendimiento del tema que puede ser aprovechado por los diferentes actores. Una recomendación puntual de Fernández (2022) para Colombia es el uso de vouchers por pagos a la seguridad social (es decir, por contratar de manera formal) para firmas debajo de un techo de ingresos que, posteriormente, puedan ser canjeados al superar tal techo.

4. Dar continuidad al compromiso del sector empresarial con la innovación y las políticas de equidad, diversidad e inclusión.

a. Innovación. El gasto en investigación y desarrollo (I+D) ha ido aumentando progresivamente en el país, pasando de 0.13 % del PIB en 2000 a 0.28 % en 2020. Si a esto se agrega el crecimiento del PIB, significa que el valor absoluto de I+D ha aumentado, aunque se encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe (0.63 %) y lejos del promedio de la OCDE (2.7 %). A pesar de este bajo nivel de inversión, destaca el compromiso del sector empresarial con la innovación.

El programa Innovación Más País revela que las 347 empresas innovadoras medidas en 2021 invertían, en promedio, el 5.6 % del total de sus ventas en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Si tomamos en cuenta que en 2016 invertían el 2.7 %, vemos que la inversión se ha duplicado. Asimismo, las empresas reportan que esta inversión les generó, en promedio, un 20.3 % de ventas. Destaca que el 33.9 % de estas empresas son pymes y 18.4 %, *startups*. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Unesco, para 2015 al sector privado empresarial le correspondía cerca del 45 % de la inversión en I+D del país, seguido por las instituciones de educación superior, con 25 %; organizaciones sin fines de lucro, con 20 %; y el Gobierno, con 10 % (Unesco, 2020). Esto, sumados a la contribución estimada en I+D, demuestran que el sector empresarial es un gran impulsador de la innovación en Colombia.

Como línea de acción se deben continuar y fortalecer estas iniciativas ya impulsadas desde las organizaciones empresariales y que han posicionado a este sector a la cabeza de la inversión en innovación. Las organizaciones empresariales deben aumentar las estrategias para difundir estas buenas prácticas así como la información sobre el impacto de invertir en innovación, de manera que sirvan de ejemplo a otras empresas tanto locales como regionales. A su vez, se debe motivar al Gobierno a aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo para incidir positivamente en el crecimiento económico y cambio de modelo productivo de Colombia.

La innovación se asocia directamente con la inversión en tecnología. El análisis de los indicadores apunta a que Colombia se acerca a un entorno empresarial propicio para la era digital, de lo que se deriva la necesidad de acciones que incentiven y apoyen el crecimiento de industrias de tecnología, información y comunicación (TIC). Un tema ya mencionado es la necesidad de fomentar las exportaciones de productos TIC, sobre todo aquellos que presentan mayor complejidad. Las organizaciones empresariales también pueden asesorar a las mipymes en destinar recursos para adaptar tecnologías, desarrollar las habilidades de su personal y crear colaboraciones (ITC, 2018). Un punto de partida son las empresas ya identificadas en Innovación Más País como ejemplos para otras empresas.

b. Políticas de equidad, diversidad e inclusión. En Colombia existe una brecha histórica entre la tasa de ocupación de hombres y mujeres —que se ha mantenido casi invariable a lo largo del tiempo— con una diferencia promedio de 26.8 puntos porcentuales desde 2002 hasta 2021. En 2021, la brecha salarial para las mujeres ocupadas en Colombia fue del 6.3 % (promedio mensual), según el DANE y la OIT (2023). Aunque este promedio es menor que el de los países de la OCDE (12 %), en Colombia las mayores diferencias se observan en mujeres con bajo nivel educativo, residentes en zonas rurales, de etnicidad afrodescendiente y que viven en hogares con menores de 18 años, así como

las que se ubican en escalas salariales altas (DANE y OIT, 2023; OCDE, 2022). Un dato positivo es que dentro de la población asalariada que trabaja a tiempo completo (40 horas o más), la brecha es del 4 % a favor de las mujeres y se mantiene en la mayoría de las desagregaciones. Además, la brecha también está a favor de las mujeres en las empresas medianas y pequeñas, es decir, las que cuentan con menos de 200 empleados (DANE y OIT, 2023).

Estos avances se deben, en parte, al compromiso del sector empresarial a impulsar políticas de equidad, diversidad e inclusión. Según una encuesta recurrente sobre equidad de género realizada por la ANDI a 250 empresas en 2023, el 59.2 % de ellas contaba con una política de equidad, diversidad e inclusión; el 45.2 % evaluaba su situación en estos aspectos (31.3 % en 2021); y un 41.6 % tenía un presupuesto asignado para implementar acciones en estas áreas (25.7 % en 2022) (ANDI, 2023b). Estos esfuerzos deben ser mantenidos y difundidos por las organizaciones empresariales para disminuir la brecha de ocupación existente y las desigualdades reportadas por diferentes grupos.

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D.; Zilibotti, F.** (1997). Was Prometheus Unbound by Chance? Risk, Diversification, and Growth. *Journal of Political Economy*, 105(4), 709-751.
- Akbulut, R.** (2011). Sectoral Changes and the Increase in Women's Labor Force.
- Aleman, M. M.; Lluch, A. V.; Lópe, J. F. V.; García, J. G. S.** (2021). E-learning in "innovation, creativity and entrepreneurship": Exploring the new opportunities and challenges of technologies. *Journal of Small Business Strategy*, 31(1), 39-50.
- Alston, L. J.; Mueller, B.** (2010). Property Rights, Land Conflict and Tenancy in Brazil (No. w15771). National Bureau of Economic Research.
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI** (2023). Entrevistas e intercambios de comentarios y documentos de trabajo realizados entre abril y junio 2023.
- ANDI** (2023b). Encuesta de Equidad de Género. Compartida con los consultores.
- ANDI** (2022). Documentos proporcionados sobre programas Innovación Más País.
- Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF** (2021). Encuesta mipyme. Disponible en: <https://www.anif.com.co/encuesta-mipyme-de-anif/encuesta-mipyme-anif/>.
- Azeng, T. F.; Yogo, T. U.** (2013). Youth Unemployment and Political Instability in Selected Developing Countries. Tunis, Tunisia: African Development Bank.
- Banco de la República-BanRep** (mayo de 2023). Política Monetaria: La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Disponible en: <https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria>.
- BanRep** (diciembre de 2022). El comportamiento de la tasa de cambio y las estrategias de políticas. <https://www.banrep.gov.co/es/blog/comportamiento-tasa-cambio-estrategias-politica>.
- BanRep** (diciembre de 2018). La banca nacional de desarrollo en Colombia.
- Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Agosin et al.** (2014). ¿Cómo repensar el desarrollo productivo?: Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17525/como-repensar-el-desarrollo-productivo-politicas-e-instituciones-solidas-para-la>.
- BID.** La era de la productividad: Cómo transformar las economías desde sus cimientos. <https://publications.iadb.org/es/la-era-de-la-productividad-como-transformar-las-economias-desde-sus-cimientos-0>.
- Banco Mundial. Ha, Jongrim; Kose, M. Ayhan; Ohnsorge, Franziska** (2021). One-Stop Source: A Global Database of Inflation. Policy Research Working Paper; No. 9737. World Bank, Washington, D. C.
- Banco Mundial. Calice, P.; Díaz, F.; Masetti, O.** (2020). Interest Rate Repression Around the World. World Bank, Washington, D. C.
- Banerjee, A.; Duflo, E.** (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty.
- Becker, G.** (1994). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Third Edition. National Bureau of Economic Research.

- Bhatta, S. D.; Drennan, M. P.** (2003). The economic benefits of public investment in transportation: A review of recent literature. *Journal of Planning Education and Research*, 22, 288–296.
- Bloom, N.; Sadun, R.; Van Reenen, J.** (2016). Management as a Technology? National Bureau of Economic Research.
- Bloom, N.; Mahajan, A.; McKenzie, D.; Roberts, J.** (2010). Why Do Firms in Developing Countries Have Low Productivity?
- Bloom, N.; Van Reenen, J.** (2007). Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351-1408.
- Brichetti, J. P.; Mastronardi, L.; Rivas, M. E.; Serebrisky, T.; Solís, B.** (2021). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/la-brecha-de-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe-estimacion-de-las-necesidades-de>.
- B. T. Index.** (2012). Bertelsmann Stiftung. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-report/BOL#pos5>.
- Butler, A. W.; Cornaggia, J.** (2011). Does Access to External Finance Improve Productivity? Evidence from a Natural Experiment. *Journal of Financial Economics*, 99(1), 184-203.
- Centro de Comercio Internacional-ITC** (2018). SME Competitiveness Outlook 2018: Business Ecosystems for the Digital Age. Disponible en: <https://intracen.org/es/recursos/publicaciones/sme-competitiveness-outlook-2018-business-ecosystems-for-the-digital-age-en>.
- Cette, G.; Fernald, J.; Mojon, B.** The pre-Great Recession slowdown in productivity. *European Economic Review*, 88, 3-20. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.012>.
- Comisión para América Latina y el Caribe-Cepal, N. U.** (2021). Digital technologies for a new future. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf.
- Confederation of British Industry-CBI** (2017). Unlocking regional growth. Understanding the drivers of productivity across the UK's regions and nations. Disponible en: <https://www.cbi.org.uk/media/1170/cbi-unlocking-regional-growth.pdf>.
- Crespi, G.; Zuniga, P.** (2012). Innovation and Productivity: Evidence from Six Latin American Countries. *World Development*, 40(2), 273-290.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.** Productividad Total de los Factores (PTF). Accedido el 15 de junio de 2023. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/productividad>.
- DANE y OIT** (marzo 2023). La brecha salarial en Colombia no cede, las mujeres continúan en desventaja según la OIT y el DANE. Disponible en: https://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_872793.
- DANE** (2021). Censo Económico de Colombia. Plan General Enero 2021. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/censo-economico/documento-conceptual/documentos/censo-economico-plan-general.pdf>.
- DANE.** Datos de desempleo. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-laboral-de-la-juventud-historicos>.

- DANE.** Datos de informalidad. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/informalidad-y-seguridad-social/empleo-informal-y-seguridad-social-historicos>.
- Deng, T.** (2013). Impacts of Transport Infrastructure on Productivity and Economic Growth: Recent Advances and Research Challenges. *Transport Reviews*, 33(6), 686-699.
- Díaz, A. M.; Salas, L.M.** (2020). Youth jobs, skill and educational mismatches in Colombia. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Working Paper 2020/04.
- Dietrich, H.** (2012). Youth Unemployment in Europe. Theoretical considerations and empirical findings. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09227.pdf>. Último acceso, 16(7), 2012.
- Drucker, P.** (2014). *Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.
- Duggal, V. G.; Saltzman, C.; Klein, L. R.** (1999). Infrastructure and productivity: a nonlinear approach. *Journal of Econometrics*, 92(1), 47-74.
- El Colombiano** (octubre de 2022). ¿Cómo será la compra de tierras? Detalles del acuerdo entre Fedegán y Gobierno Petro. Disponible en: <https://www.elcolombiano.com/colombia/estos-son-los-detalles-del-acuerdo-de-compra-de-tierras-que-firmo-el-gobierno-del-presidente-petro-con-el-presidente-de-fedegan-jose-felix-lafaurie-DD18828812>.
- El País.** Juan Esteban Lewin (marzo de 2023). El Banco de la República escala las tasas de interés hasta un 13 % en Colombia. Disponible en: <https://elpais.com/america-colombia/2023-03-30/el-banco-de-la-republica-escala-las-tasas-de-interes-hasta-un-13-en-colombia.html>.
- El Tiempo** (marzo de 2023). Disponible en: <https://www.eltiempo.com/economia/empresas/ultra-air-estas-son-las-medidas-adoptadas-para-proteger-a-pasajeros-754919>.
- Esposito, Gianluca; Lanau, Sergi; Pompe, Sebastian** (2014). Judicial System Reform in Italy: A Key to Growth. Disponible en: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf>.
- Fernández, C.** (2022). Firms, Informality & Institutions. The case of Colombia. Universidad del Rosario. Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co/items/51367c1c-22bf-4a50-8c7e-93adfee99a8c>.
- Fernández, C.** (2020). Informalidad empresarial en Colombia. Coyuntura económica: Investigación económica y social, pp. 133-168.
- Fernández-Arias, E.** (2014). Productivity and Factor Accumulation in Latin America and the Caribbean: A Database. BID. Disponible en: <https://publications.iadb.org/en/publication/12817/productivity-and-factor-accumulation-latin-america-and-caribbean-database>.
- Flabbi, L.; Macis, M.; Moro, A.; Schivardi, F.** (2019). Do Female Executives Make a Difference? The Impact of Female Leadership on Gender Gaps and Firm Performance. *The Economic Journal*, 129(622), 2390-2423.
- Fondo Monetario Internacional-FMI.** World Economic Outlook.
- FMI. El-Ganainy et al.** (2021). Inclusivity in the Labor Market. IMF Working Paper 21/141.
- FMI. Marc-Natal, J.; Barrett, P.** (abril 2023). Interest Rates Likely to Return Toward Pre-Pandemic Levels When Inflation is Tamed. IMF Blog. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/04/10/interest-rates-likely-to-return-towards-pre-pandemic-levels-when-inflation-is-tamed>.
- FMI. Hakura, D.** What is debt sustainability? (septiembre de 2020). Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/09/what-is-debt-sustainability-basics>.

- FMI. Ostry et al.** (2018). Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence. Staff Discussion Notes. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Economic-Gains-From-Gender-Inclusion-New-Mechanisms-New-Evidence-45543>.
- Foro Económico Mundial-FEM.** Informe sobre el futuro del empleo 2023. Disponible en: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/>.
- FEM. McMillian, D.** Inflation: there's a vital way to reduce it that everyone overlooks—raise productivity. June 9, 2022. Disponible en: <https://www.weforum.org/agenda/2022/06/inflation-there-s-a-vital-way-to-reduce-it-that-everyone-overlooks-raise-productivity#:~:text=Why%20does%20productivity%20matter%20for,therefore%20associated%20with%20lower%20inflation>.
- FEM** (2019). Global Competitiveness Index. Disponible en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
- Freire, C.** (agosto de 2021). The impact of frontier technologies on inequalities across countries. IAP. UNIDO. Disponible en: <https://iap.unido.org/articles/impact-frontier-technologies-inequalities-across-countries>.
- Galiani, S.; Schargrodsky, E.** (2010). Property rights for the poor: Effects of land titling. *Journal of Public Economics*, 94(9-10), 700-729.
- GEM** (2019). Disponible en: <https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report>.
- Giang, M. H.; Trung, B. H.; Yoshida, Y.; Xuan, T. D.; Que, M. T.** (2019). The Causal Effect of Access to Finance on Productivity of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Sustainability*, 11(19), 5451.
- Global Entrepreneurship Monitor-GEM** (2022). Nuestro reto: impactar la dinámica emprendedora colombiana. GEM Colombia 2021-2022. Disponible en: <https://gemconsortium.org/report/nuestro-reto-impacta-la-dinamica-emprendedora-colombiana-gem-colombia-2021-2022>.
- Guillemette, Y.; Kopoin, A.; Turner, D.; De Mauro, A.** (2017). A revised approach to productivity convergence in long-term scenarios.
- Heng, D.; Chea, S.; Heng, B.** (2021). Impacts of Interest Rate Cap on Financial Inclusion in Cambodia. International Monetary Fund. Disponible en: <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2021/107/article-A001-en.xml>.
- Hausmann et al.** (2013). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qf8jp>.
- Hsieh, Chang-Tai; Hurst, Eric; Jones, Charles; Klenow, Peter.** 2019. The Allocation of Talent and U. S. Economic Growth, *Econometrica* 87:5, 1439-1474. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA11427>.
- Isaksson, A.** (2007). Determinants of Total Factor Productivity: a literature review. Research and Statistics Branch, UNIDO, 1, 101.
- Islam, Roumeen.** (2003). Do More Transparent Governments Govern Better? Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=636439.
- Johnson, D.** (2001). What is innovation and entrepreneurship? Lessons for larger organisations. *Industrial and Commercial Training*, 33(4), 135-140.
- Juvenal, L.; Santos Monteiro, P.** (2013). Export market diversification and productivity improvements: theory and evidence from Argentinean firms. FRB of St. Louis, Working Paper No. 2013-015A.

- Kim, Y. E.; Loayza, N.** (2019). Productivity Growth: Patterns and Determinants across the World. World Bank Policy Research Working Paper, (8852).
- Koyuncu, J. Y., Yılmaz, R., & Ünver, M.** (2016). The relationship between female labor force participation and labor productivity: Panel data analysis. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(2), 237-249.
- Krugman, P.** (1997). The Age of Diminished Expectations, 3rd Edition: U. S. Economic Policy in the 1990s, MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, volume 1, number 0262611341, December.
- La Porta, R.; Shleifer, A.** (2014). Informality and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 28 (3), 109-26. Disponible en: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.3.109>.
- Lambsdorff, J. G.** (2003). How corruption affects productivity. *Kyklos*, 56(4), 457-474.
- Lanyi, A.** (1983). The importance of interest rates in developing economies. *Finance & Development*, 21.
- Lawry, S.; Samii, C.; Hall, R.; Leopold, A.; Hornby, D.; Mtero, F.** (2014). The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1), 1-104.
- Ley nro. 789 de diciembre de 2002.** Disponible en: <https://www.oitcinterfor.org/contrato-aprendizaje/contrato-aprendizaje-colombia>.
- Loayza, N. V. (Ed.).** (2010). Business regulation and economic performance. World Bank Publications.
- Loayza, N.** (2018). Informality: Why is it so Widespread and How can it be Reduced? World Bank Research and Policy Briefs, (133110).
- March, J.** (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. *Organization Science*, 2(1), 71-87. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/2634940>.
- Manyika, J.; Roxburgh, C.** (2011). The great transformer: The impact of the Internet on economic growth and prosperity. McKinsey Global Institute, 1(0360-8581).
- Masello, D.** (2021). Problemas actuales de la economía informal. Desventajas de una definición generalista del empleo informal para sociedades desequilibradas. *Inter disciplina*, 9(23), 15-34.
- McKinsey.** (2015). McKinsey & Company. Global growth: Can Productivity Save the Day in an Aging World? Disponible en: https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Can%20long%20term%20global%20growth%20be%20saved/MGI_Global_growth_Full_report_February_2015pdf.pdf.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).** Índice de Brecha Digital 2021. Disponible en: <https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-461902.html>.
- Monacelli, T.; Sala, L.; Siena, D.** (2023). Real interest rates and productivity in small open economies. *Journal of International Economics*, 142, 103746.
- Moss, E.; Nunn, R.; Shambaugh, J.** (2020). The Slowdown in Productivity Growth and Policies That Can Restore It. The Hamilton Project–Brookings Institution. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/06/Productivity_Framing_LO_6.16_FINAL.pdf.
- Naciones Unidas** (2021). Technology and Innovation Report 2021: Catching Technological Waves. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf.

- Naciones Unidas** (2007, Febrero 7-16). Youth Employment: Impact, Challenges and Opportunities for Social Development. Promoting Full Employment and Decent Work for All, New York, USA. Disponible en: <https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/csocd45emergingissues.pdf>.
- National Research Council** (1986). Electricity in economic growth. National Academies Press.
- Nwandu, E.** (2016). Impact of rising interest rate on the performances of the Nigerian manufacturing sector. *European Journal of Business and Management*, 8(10), 125-134.
- Ocampo, J. A.** (2005). A Broad View of Macroeconomic Stability. DESA Working Paper No. 1. United Nations.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE** (2022a). Identifying the Main Drivers of Productivity Growth. A Literature Review. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/identifying-the-main-drivers-of-productivity-growth_0e2f7a46-en.
- OCDE** (2022b). Employment Outlook 2022. Tackling the cost-of-living crisis. Why bold government action is needed in labour markets. Disponible en: <https://www.oecd.org/employment-outlook/2022/>.
- OCDE** (2022c). Same skills, different pay. Tackling gender inequalities at firm level. Disponible en: <https://www.OECD.org/gender/same-skills-different-pay-2022.pdf>.
- OCDE** (2018). PISA 2018 Results. Combined Executive Summaries.
- OCDE. Andrews, D.; Criscuolo, C.; Gal, P.** (2016). The Best versus the Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms and the Role of Public Policy. Working Paper No. 05.
- OCDE** (2015). The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth, and Well-Being. Disponible en: <https://www.OECD.org/innovation/the-innovation-imperative-9789264239814-en.htm>.
- OCDE** (2014). The rationale for fighting corruption. Disponible en: <https://maritimecyprus.files.wordpress.com/2017/09/oecd.pdf>.
- OCDE. Noteboom, B.** (2013). Making labour markets inclusive. Disponible en: <https://www.oecd.org/employment/making-labour-markets-inclusive.htm#:~:text=An%20inclusive%20labour%20market%20is,in%20many%20sectors%20and%20economies>.
- OCDE** (2001). Measuring Productivity OECD Manual. Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/2352458.pdf>.
- OCDE.** Hours Worked 2021. Accedido el 15 de junio de 2023. Disponible en: https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm?TB_iframe=true&width=921.6&height=921.6.
- Organización Internacional del Trabajo-OIT. Ernst, E.; Merola, R.; Reljic, J.** (2022a). Labour market policies for inclusiveness: A literature review with a gap analysis.
- OIT** (2022b). Global employment trends for youth 2022: investing in transforming futures for young people. International Labour Office. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_853321.pdf.
- OIT** (2022c). Informe Regional 2022. ¿Dónde están las organizaciones empresariales en el viaje hacia la digitalización? Una mirada a América Latina. Lima: OIT, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP).
- OIT** (2022d). Care at work. Investing in care leave and services for a more gender equal world of work. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/publication/wcms_838653.pdf.

- OIT** (2022e). Informe Regional. Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo. Informe regional complementario para América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_860719/lang-es/index.htm.
- OIT** (2021). Balance de los beneficios de la digitalización: Una guía para las organizaciones de empleadores y miembros de empresas (OE). Disponible en: <https://www.itcilo.org/es/resources/balance-de-los-beneficios-de-la-digitalizacion>.
- OIT** (2020). Impulsando la productividad. Una guía para Organizaciones Empresariales. ACT/EMP. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_759690.pdf.
- OIT** (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third edition. Disponible en: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang-en/index.htm.
- OIT** (2015). Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204.
- OIT** (2013). Informal enterprises: policy supports for encouraging formalization and upgrading. International Labour Organization. Geneva, Switzerland. Disponible en: https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_210463/lang-en/index.htm.
- Penn World Table**, <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en>.
- PNUD** (2021). Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia. Disponible en: <https://www.undp.org/es/colombia/publicaciones/informe-desarrollo-humano-colombia-cuaderno-1>.
- Rose-Ackerman, S.; Palifka, B. J.** (2016). Corruption and government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
- Rotberg, R.** (2018). The Corruption of Latin America. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94057-1_1.
- Roth, F.** (2022). The Rule of Law and Labor Productivity Growth by Businesses: Evidence for the EU, 1998–2005. In *Intangible Capital and Growth: Essays on Labor Productivity, Monetary Economics, and Political Economy*, Vol. 1 (pp. 43-72). Cham: Springer International Publishing.
- Schumpeter, J.; Backhaus, U.** (2003). The Theory of Economic Development (pp. 61-116). Springer US.
- Schurr, S. H.; Darmstadter, J.; Perry, H.; Ramsay, W.; Russell, M.** (1979). *Energy in America's Future*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Schwarzer, J.** (2017). The Effects of Exporting on Labor Productivity: Evidence from German Firms. CEP Working Paper, 2.
- Stein, R.** (2009). Rule of law: What does it mean. *Minnesota Journal of International Law*, 18, 293.
- Stewart, J.** (2022). Why was Labor Productivity Growth So High during the COVID-19 Pandemic? The Role of Labor Composition. U.S. Bureau of Labor Statistics. Disponible en: <https://www.bls.gov/osmr/research-papers/2022/ec220010.htm>.
- Su, Z.; Wang, C.; Peng, M. W.** (2022). Intellectual property rights protection and total factor productivity. *International Business Review*, 31(3), 101956.
- Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades** (2022). Reporte de Inclusión Financiera 2022. Disponible en: <https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/publicaciones/>

[reportes-anuales](https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/estadisticas/general). Datos específicos obtenidos de: <https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/estadisticas/general>.

Taylor, S. P. (2017). What is Innovation? A Study of the Definitions, Academic Models and Applicability of Innovation to an Example of Social Housing in England. *Open Journal of Social Sciences*, 5(11), 128-146.

The Conference Board, <https://www.conference-board.org/eu/>.

The Economist (junio de 2023). Why are Latin American workers so strikingly unproductive? Disponible en: <https://www.economist.com/the-americas/2023/06/08/why-are-latin-american-workers-so-strikingly-unproductive>.

Ulyssea, G. (2020). Informality: Causes and Consequences for Development. *Annual Review of Economics*, 12, 525-546.

Ulyssea, G. (2018). Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108 (8): 2015-47.

Wu, R.; Cheng, X. (2016). Gender equality in the workplace: The effect of gender equality on productivity growth among the Chilean manufacturers. *The Journal of Developing Areas*, 257-274.

Xuefeng, Q.; Yaşar, M. (2016). Export Market Diversification and Firm Productivity: Evidence from a Large Developing Country. *World Development*, 82, 28-47.



Organización
Internacional
del Trabajo

ACT/EMP

Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe

